



Consejo Económico y Social

Distr. general
24 de abril de 2019

Original: español
Español, francés e inglés
únicamente

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Tercer informe periódico que el Estado Plurinacional de Bolivia debía presentar en 2010 en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto* **

[Fecha de recepción: 12 de marzo de 2019]

* El presente documento se publica sin haber sido objeto de revisión editorial oficial.

** Los anexos al presente documento pueden consultarse en los archivos de la Secretaría. También se encuentran disponibles en la página web del Comité.

GE.19-06753 (S)



Se ruega reciclar



Abreviaciones

| | |
|------------|--|
| AEVIVIENDA | Agencia Estatal de Vivienda |
| AIOC | Autonomía Indígena Originario Campesina |
| ALP | Asamblea Legislativa Plurinacional |
| CEPOs | Consejos Educativos de los Pueblos Originarios |
| CIMPDS | Comité Interinstitucional de las Metas del PDES y de Desarrollo Sostenible |
| CM | Consejo de la Magistratura |
| CNCRD | Consejo Nacional Contra el Racismo y toda forma de Discriminación |
| CNNA | Código Niña, Niño y Adolescente |
| CP | Código Penal |
| CPE | Constitución Política del Estado |
| CT-CONAN | Comité Técnico del Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición |
| CTSA | Conocimientos Tradicionales y Saberes Ancestrales |
| D.S. | Decreto Supremo |
| EDSA | Encuesta de Demografía y Salud |
| FELCV | Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia |
| GADs | Gobiernos Autónomos Departamentales |
| GAMs | Gobiernos Autónomos Municipales |
| ILCs | Institutos de Lenguas y Culturas |
| INE | Instituto Nacional de Estadística |
| IPELC | Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas |
| MEFP | Ministerio de Economía y Finanzas Públicas |
| MJTI | Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional |
| MPD | Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| MTEPS | Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social |
| MESCP | Modelo Económico Social Comunitario Productivo |
| NNA | Niña, niño y adolescente |
| NPIOCs | Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos |
| ODS | Objetivos del Desarrollo Sostenible |
| OEP | Órgano Electoral Plurinacional |
| PAN | Política de Alimentación y Nutrición |
| PDES | Plan de Desarrollo Económico Social |
| PGDES | Plan General de Desarrollo Económico y Social |
| PGN | Presupuesto General de la Nación |
| PMDC | Programa Multisectorial de Desnutrición Cero |
| PMUAN | Plan Multisectorial de Alimentación y Nutrición |
| PNADH | Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos |
| PVS | Programa de Vivienda Social y Solidaria |
| RUV | Registro Único de Violencia |
| SAFCI | Salud Familiar Comunitaria Intercultural |
| SC | Sentencia Constitucional |

| | |
|----------|---|
| SCP | Sentencia Constitucional Plurinacional |
| SENAPI | Servicio Nacional de Propiedad Intelectual |
| SIPPASE | Sistema Integrado Plurinacional de Prevención, Protección, Atención, Sanción y Eliminación de la Violencia en Razón de Género |
| SPINNA | Sistema Plurinacional Integral de la NNA |
| SIPROINA | Sistema Plurinacional de Protección Integral de NNA |
| SLIM | Servicios Legales Integrales Municipales |
| SNIS | Sistema Nacional de Información en Salud |
| SPIE | Sistema de Planificación Integral del Estado |
| SUMI | Seguro Universal Materno Infantil |
| TA | Tribunal Agroambiental |
| TCOs | Tierras Comunitarias de Origen |
| TCP | Tribunal Constitucional Plurinacional |
| TGN | Tesoro General de la Nación |
| TIOCs | Territorio Indígena Originario Campesino |
| TSE | Tribunal Supremo Electoral |
| TSJ | Tribunal Supremo de Justicia |
| UEVE | Unidad Ejecutora de Viviendas de Emergencia |
| UNESCO | Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura |
| VRG | Violencia en Razón de Género |

I. Introducción

1. El Estado Plurinacional de Bolivia (“Bolivia” o “Estado” o “Estado boliviano”), de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 16 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Pacto”), presenta su Tercer, Cuarto y Quinto Informes Periódicos, dando a conocer las medidas asumidas entre el periodo 2009 al 2018, en cumplimiento a las disposiciones del Pacto y las recomendaciones emitidas por el Consejo Económico y Social (“Consejo”) al Segundo Informe Periódico (E/C.12/BOL/2) de 20 de agosto de 2007.
2. El Pacto, así como los demás instrumentos internacionales de derechos humanos, forma parte del bloque de constitucionalidad, por lo que prevalecen en el orden interno, en virtud de lo previsto en los Artículos 13.II y IV; 256 y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE) (Anexo 1).
3. El Estado Plurinacional de Bolivia, ha venido trabajando de manera progresiva en la promoción y protección para garantizar el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. Fruto de este trabajo, es la existencia de una gran cantidad de normas que promueven los derechos de las poblaciones más vulnerables en el Estado; asimismo, cabe destacar las acciones realizadas para disminuir los niveles de analfabetización, promoviendo la mejora salarial y apostando a la salud sin exclusiones.

II. Generalidades

4. La extensión territorial del Estado asciende a 1.098.581 km², la división política y administrativa que adoptó se organiza en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos, contando con nueve departamentos: Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro, Pando, Potosí, Santa Cruz y Tarija, divididos en 112 provincias y 339 municipios.
5. Según el Censo de Población y Vivienda de 2011, Bolivia tiene 10.027.254 habitantes, número que de acuerdo a las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 2018, ascendió a 11.307.000 habitantes. De ese total, los hombres representan el 50,4 % y las mujeres el 49,6 %; y la mayor parte de la población vive en el área urbana representando el 69,4 %, mientras que la población del área rural alcanza el 30,6 %.
6. Una de las características principales de Bolivia es su diversidad cultural, con la presencia actual de pueblos y naciones etnolingüísticamente diferenciados, los cuales son: aymara, araona, afroboliviano, ayoreo, baure, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán o tsimane, chiquitano, quechua, uru (chipaya, murato e hiritu), leco, machineri, moré, movima, mosetén, moxeño (ignaciano y trinitario), nahua, yuki, yuracaré, yaminahua, esse ejja, guaraní (ava, izoceño y simba), guarayo, itonama, joaquiniano (conglomerado multiétnico), pacahuara, paiconeca, reyesano, sirionó, tacana, tapiete, toromona y weenhayek (mataco).
7. La Asamblea Constituyente, instituida a partir de la Ley 3364 de 6 de marzo de 2006, inaugurada en la ciudad de Sucre del Departamento de Chuquisaca, el 6 de agosto de 2006, contó con la participación de 255 Asambleístas, entre ellos, actores de partidos políticos, dirigentes y representantes de pueblos, organizaciones indígenas y campesinas de todo el país, generando una oportunidad para que cualquier organización, partido político o persona individual pueda plantear su propuesta sin ningún tipo de límite o restricción, teniendo como producto un pacto social, que consideró más de 138 propuestas¹.
8. La CPE es el decimoséptimo texto constitucional boliviano; sin embargo, es el primero resultado de un pacto social, fue promulgado el 7 de febrero de 2009, por el

¹ Se presentaron cinco propuestas de agrupaciones ciudadanas, nueve de partidos políticos, 19 de organizaciones públicas, 45 de organizaciones y movimientos sociales, nueve de organizaciones cívicas y departamentales, 11 de pueblos indígenas, tres de empresarios privados, 15 de ONGs, cuatro de las Iglesias, 16 posiciones individuales y dos de propuestas variadas.

Presidente Evo Morales, tras ser aprobado el 25 de enero de 2009, mediante referéndum en el cual se alcanzó el apoyo del 61,43 % del total de los votos.

9. La CPE, reconoce que, en el marco de la diversidad, se ha establecido como idiomas oficiales del Estado, el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos².

10. El Estado boliviano, a partir del texto constitucional, instituye a Bolivia como un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías; conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianos que en conjunto constituyen el pueblo boliviano.

11. La soberanía reside en el pueblo boliviano y ésta se ejerce de forma directa y delegada, emanando de ella las funciones y atribuciones de los órganos del poder público, estructurándose en sus Órganos: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral. El Órgano Ejecutivo está compuesto por la Presidenta o el Presidente del Estado, la Vicepresidenta o Vicepresidente y las Ministras y Ministros del Estado.

12. Uno de los cambios estructurales a partir del texto constitucional de 2009 es el surgimiento de las autonomías departamental, regional, municipal e indígena originario campesinas³, las cuales implican la elección directa de sus autoridades, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva. Con la aprobación de la CPE, la nueva estructura del Estado está siendo consolidada a través de las leyes orgánicas aprobadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

13. La elección de la Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o Vicepresidente, de las Gobernadoras o Gobernadores de Departamento, y de las Alcaldesas o Alcaldes Municipales se realiza mediante sufragio directo, libre y secreto⁴, y es a partir de la CPE que las magistradas y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)⁵, del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)⁶ y del Tribunal Agroambiental (TA)⁷, así como los integrantes del Consejo de la Magistratura (CM)⁸, son elegidos mediante sufragio universal, buscando garantizar la independencia de la administración de justicia y el reconocimiento constitucional de la justicia indígena originaria campesina.

14. Igualmente, se ha instituido la participación y control social, por el cual la sociedad civil organizada ejerce el control sobre la gestión pública en todos los niveles estatales, así como de empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales, servicios estratégicos o de interés colectivo⁹.

15. La ALP está conformada por una Cámara de Diputados, compuesta por 130 miembros y otra de Senadores, conformada por 36 miembros, es decir, 4 representantes por cada Departamento, todos elegidos mediante votación universal, directa y secreta¹⁰.

16. El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) está compuesto por: el Tribunal Supremo Electoral (TSE)¹¹, Tribunales Electorales Departamentales, Juzgados Electorales; Jurados de Mesas de Sufragio y Notarios Electorales.

17. Respecto a la protección de los derechos humanos, la CPE ha consagrado un nuevo catálogo de derechos fundamentales que retoma los principales instrumentos de carácter universal y regional sobre derechos humanos. A diferencia del anterior texto constitucional,

² CPE, Artículo 5.

³ CPE, Artículo 269.

⁴ CPE, Artículo 165.

⁵ CPE, Artículo 182.

⁶ CPE, Artículo 198.

⁷ CPE, Artículo 188.I.

⁸ CPE, Artículo 194.I.

⁹ CPE, Artículo 241.II.

¹⁰ CPE, Artículo 146.I.

¹¹ CPE, Artículo 205.I.

este catálogo tiene un carácter amplio que clasifica a los derechos fundamentales en: civiles; políticos; de los pueblos y las naciones indígenas originario campesinos; sociales y económicos; de la niñez, adolescencia y juventud; de las familias; las personas adultas mayores; de las personas con discapacidad; de las personas privadas de libertad; de las usuarias y usuarios, las consumidoras y consumidores; educación; interculturalidad; y culturales¹².

18. El proceso de ratificación de los Tratados Internacionales en Bolivia, implica la intervención de los Órganos Ejecutivo y Legislativo¹³, al ser atribución del Presidente suscribir Tratados Internacionales¹⁴, y de la ALP la de ratificarlos. Además, los Tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, que hayan sido ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado Boliviano, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la CPE¹⁵, se aplicarán de manera preferente sobre ésta, y los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales sobre derechos humanos, cuando éstos prevean normas más favorables, en la medida que estas normas forman parte del bloque de constitucionalidad¹⁶.

19. Igualmente, la educación constituye una función suprema y responsabilidad de Estado; el Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo. La educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad; intracultural, intercultural y plurilingüe¹⁷.

20. En cumplimiento de la Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, Bolivia contó con el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos, Bolivia Digna Para Vivir Bien, (PNADH), 2009-2013, aprobado mediante Decreto Supremo 29851 de 30 de diciembre de 2008 (D.S. 29851) (Anexo 2).

21. El PNADH 2009-2013 (Anexo 3), fue elaborado y construido de forma comunitaria, participativa y democrática, en base a una lectura de la realidad, en concordancia con una nueva visión del país y observando los avances del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, teniendo como prioridad la atención de las necesidades de la población boliviana; asimismo, haciendo énfasis en la equiparación de oportunidades de los grupos históricamente excluidos y discriminados.

22. La Defensoría del Pueblo tiene como obligación principal la promoción y protección de los derechos humanos¹⁸, está encargada de velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, consagrados en la CPE, las leyes y los instrumentos internacionales, alcanza la actividad administrativa de todo el sector público y la actividad de instituciones privadas que presten servicios públicos.

23. El TCP vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y vigencia de los derechos y garantías constitucionales¹⁹. El carácter de plurinacionalidad de este Tribunal se refiere a su composición, estando integrado por Magistradas y Magistrados elegidos, con representación paritaria entre el sistema ordinario y el sistema indígena originario campesino²⁰.

¹² CPE, Artículos 15 al 101.

¹³ CPE, Artículo 259.

¹⁴ CPE, Artículo 166.5.

¹⁵ CPE, Artículo 256. I.

¹⁶ CPE, Artículo 410.

¹⁷ CPE, Artículo 17.

¹⁸ CPE, Artículo 218.

¹⁹ CPE, Artículo 196.I.

²⁰ CPE, Artículo 197.I.

III. Información relativa a los Artículos 1 a 15 del Pacto

Artículo 1

Derecho a la libre determinación

24. La CPE reconoce 4 tipos de autonomías: departamental, regional, municipal e indígena originario campesina. De acuerdo a lo previsto en el Artículo 289 y siguientes, la Autonomía Indígena Originario Campesina (AIOC) consiste en el autogobierno, como ejercicio de la libre determinación de las naciones y pueblos indígena, originario campesinos. En este entendido, la Ley 031 de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” (“Ley 031”) (Anexo 4), establece los procedimientos y mecanismos de constitución de la AIOC.

25. A su vez, la Ley 031 en su Artículo 50.II, dispone que la conversión de municipio en AIOC se activa por iniciativa popular a través de referendo, impulsado por las autoridades indígena originario campesinas, de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley 026 de 30 de junio de 2010, de Régimen Electoral (“Ley 026”) (Anexo 5).

26. La AIOC es la expresión del derecho al autogobierno, como ejercicio de la libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinas, colectividad humana que comparte territorio, cultura, historia, lengua, organización e instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas reflejadas entre normas y procedimientos propios, contexto cultural que toma como base para el reconocimiento de su condición política al territorio indígena originario campesino, el municipio o región, existente o regiones que se conformen por adición o reunión de las AIOC.

27. El Decreto Supremo 727 de 6 de diciembre de 2010²¹ (D.S. 727) (Anexo 6), establece que las Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) existentes, pasan a denominarse Territorio Indígena Originario Campesino (TIOCs), que serán nombrados por los propios pueblos según sus normas.

28. En este marco y durante el periodo que comprende las gestiones 2009 a 2017, naciones y pueblos indígena originario campesinos de 14 municipios²² promovieron su conversión a la autonomía indígena a través del referendo de consulta²³.

Artículos 2 y 3

Medidas para el ejercicio de los derechos del Pacto

29. La CPE, consagra la no discriminación y garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en la misma, leyes y tratados internacionales de derechos humanos²⁴.

30. Información adicional respecto a las acciones desarrolladas para el cumplimiento del Artículo 2 del Pacto, será detallada en la Recomendación 25 (párrafos 93 al 96).

Artículo 3

Ejercicio de los derechos sin discriminación

31. La CPE consagra la cláusula de no discriminación²⁵ y garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos

²¹ D.S. 727, Artículo 1.I.

²² Totora Marka, Uru Chipaya, Pampa Aullagas, Curahuara de Carangas, Salinas, Mojocoya, Huacaya, Tarabuco, Machareti, Jesús de Machaca, Kallawayaya, Chayanta, Charagua y Gutiérrez.

²³ Órgano Electoral, “Acciones promovidas por el Órgano Electoral Plurinacional para la promoción de los derechos humanos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

²⁴ CPE, Artículos 14.II y 14.III.

²⁵ CPE Artículo 14.II

establecidos en la misma, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos²⁶. Con ese marco constitucional, el 8 de octubre de 2010, fue promulgada la Ley 045 contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación (“Ley 045”) (Anexo 7), con el objeto de eliminar conductas de racismo y toda forma de discriminación y consolidar políticas públicas de protección y prevención de delitos de racismo y discriminación. En ese entendido, el Estado boliviano incorporó en las directrices de formulación presupuestaria, estructuras programáticas del nivel central del Estado, para la ejecución de políticas de defensa y protección de los derechos en razón de género, generacional y personas adultas mayores, que contribuyen a la implementación de acciones de prevención y atención para el efecto.

32. En cumplimiento de dicha Ley, se creó el Comité Nacional Contra el Racismo y toda forma de Discriminación (CNCRD), al cual, el Tesoro General de la Nación (TGN) otorga anualmente los recursos económicos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, como instancia encargada de que se encarga de promover, diseñar e implementar políticas y normativa integrales en la materia.

33. En virtud del Artículo 7 de la referida Ley, el CNCRD mediante Resolución 009/2011, aprobó la Política del Estado Plurinacional de Bolivia contra el Racismo y toda Forma de Discriminación (Plan de Acción 2012 - 2015) (Anexo 8); que contemplaba 17 programas orientados a la eliminación del racismo y toda forma de discriminación y cuya implementación estuvo a cargo de las instituciones del Órgano Ejecutivo.

34. En concordancia con la implementación del nuevo sistema de planificación del Estado, el Plan Multisectorial de lucha contra el Racismo y toda Forma de Discriminación 2016-2020²⁷ (Anexo 9), coadyuva a la implementación del Plan de Desarrollo Económico Social (PDES) a través de la materialización de las políticas públicas para la erradicación de la extrema pobreza, para mejorar y garantizar los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales de las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad.

35. En cumplimiento del Art. 6.III.e) y f) de la Ley 045, los medios de comunicación difunden material comunicacional contra el racismo y la discriminación²⁸.

36. En 2017, se aprobó el “Plan Multisectorial para el Avance en la Despatriarcalización y el Derecho de las Mujeres a Vivir Bien”²⁹ (Anexo 10), cuyo objetivo está orientado a que las políticas, programas y acciones del Estado, en sus diversas instancias y niveles competenciales, cuenten con un enfoque de despatriarcalización y se creen las condiciones para el logro del derecho de las mujeres a Vivir Bien, y a una vida libre de violencia en razón de género. En ese entendido, el referido Plan contempla seis áreas y lineamientos estratégicos: Económica, productiva y laboral, Educación, Salud, Violencia en razón de género, Ciudadanía y participación política y Fortalecimiento institucional.

37. En 2018, se llevó a cabo el curso: “Despatriarcalización y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres”, dirigido a servidores públicos de los 20 Ministerios del Órgano Ejecutivo, estuvo orientado a fortalecer los conocimientos respecto a la despatriarcalización y normativa vigente para la protección de los derechos de las mujeres, facilitando el cumplimiento de su trabajo.

Artículo 4

Ejercicio de los derechos conforme al Pacto

38. El Artículo 13.I de la CPE, dispone que: *“Los Derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El*

²⁶ *Ibid.* Artículo 14.III.

²⁷ Aprobado por Resolución CN 001/2016 de 7 de diciembre de 2016, del Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de Discriminación.

²⁸ CNCRD - Memoria 2016-2017, pp. 102.

²⁹ Basado en la articulación multisectorial y transversal a cargo del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional con las demás carteras de Estado que cuentan con acciones concurrentes para el avance en la despatriarcalización y los derechos de las mujeres a Vivir Bien.

Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos". Asimismo, el Artículo 137, establece que en caso de peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural, la Presidenta o Presidente del Estado puede declarar estado de excepción, el cual en ningún caso no podrá suspender las garantías, ni los derechos fundamentales, los derechos al debido proceso, a la información y de las personas privadas de libertad.

39. Es importante destacar, que la CPE y la jurisprudencia emitida por el TCP, establecen que la limitación de derechos fundamentales sólo puede realizarse mediante ley o a través de un juicio de proporcionalidad, a fin de no afectar el núcleo duro de los derechos fundamentales.

Artículo 5

Interpretación del Pacto

40. Al respecto, el TCP mediante la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0572/2014 de 10 de marzo de 2014³⁰, establece:

"...debe hacerse mención a los arts. 13 y 256 de la CPE, que introducen dos principios que guían la interpretación de los derechos fundamentales: la interpretación pro homine y la interpretación conforme a los Pactos internacionales sobre Derechos Humanos. En virtud a la primera, los jueces, tribunales y autoridades administrativas, tiene el deber de aplicar aquella norma que sea más favorable para la protección del derecho en cuestión, ya sea que esté contenida en la Constitución Política del Estado o en las normas del bloque de constitucionalidad y de adoptar la interpretación que sea más favorable y extensiva al derecho en cuestión; y en virtud a la segunda (interpretación conforme a los Pactos internacionales sobre Derechos Humanos), tienen el deber de ejercer el control de convencionalidad, interpretar el derecho de acuerdo a las normas contenidas en Tratados e Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados o a los que se hubiere adherido el Estado, siempre y cuando, claro está, declaren derechos más favorables a los contenidos en la Norma Suprema..."

41. En consecuencia, al momento de aplicar las leyes, los jueces y tribunales tienen la obligación de analizar la compatibilidad de la disposición legal con la CPE, Convenios y Pactos internacionales sobre Derechos Humanos y la interpretación que de ellas hubiera realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Artículos 6 y 7

Derecho al Trabajo

42. Éste se encuentra ampliamente reconocido en la CPE, así el Artículo 46, establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna en condiciones satisfactorias. El Estado protege el ejercicio del trabajo en todas sus formas, y se prohíbe toda forma de trabajo forzoso.

43. El Artículo 48.I, II, III y IV de la CPE, determinan que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio; que las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de trabajadoras y trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; que los derechos y beneficios reconocidos en favor de trabajadoras y trabajadores no pueden renunciarse y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos. Asimismo, los salarios devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles.

³⁰ SCP 0572/2014 de 10 de marzo, disponible en: [https://buscador.tcpbolivia.bo/_buscador/\(S\(urxrtlijqfbj3apovfbi1nzy\)\)/WfrJurisprudencia1.aspx](https://buscador.tcpbolivia.bo/_buscador/(S(urxrtlijqfbj3apovfbi1nzy))/WfrJurisprudencia1.aspx).

44. A partir de la Constitución de 2009, el Estado tiene como uno de sus principios fundamentales la protección y tutela de los derechos del trabajador, en base al derecho al trabajo, como principal fuente de ingresos para el trabajador, a partir de la mejora de los beneficios a favor de la clase trabajadora, sin sufrir ningún tipo de distinción o discriminación que viole los derechos de igualdad de oportunidades en el trabajo, estableciendo una realidad tangible desde los puntos de vista económico y social que son parte integrante de los derechos humanos y resumidos en el concepto de dignidad del ser humano.

45. Por otro lado, el Estado boliviano, desde el 2006, asumió la tarea de realizar incrementos salariales³¹ anuales, de carácter obligatorio para el sector público y privado, a través de la emisión de Decretos Supremos, bajo el denominativo de “salario mínimo nacional”, lo que constituye un avance importante en la mejora de las condiciones de vida de bolivianas y bolivianos, puesto que permite recuperar el valor adquisitivo del salario. (Anexo 11).

Artículo 8

Libertad Sindical

46. Se encuentra consagrado en la CPE, en los Artículos 51 y 52, que reconocen el derecho a organizarse en sindicatos, garantizando este derecho como un medio de defensa, representación, asistencia, educación, y cultural de trabajadoras y trabajadores, los sindicatos tendrán personería jurídica por el simple hecho de organizarse y ser reconocidos por sus entidades matrices.

47. Se reconocen también los derechos a organizarse de trabajadoras y trabajadores por cuenta propia, para la defensa de sus intereses, las asociaciones empresariales, así como las formas democráticas y organizativas empresariales.

48. Los derechos y obligaciones dentro de las relaciones laborales se encuentran regulados por la Ley General del Trabajo, de 8 de diciembre de 1942, reconociéndose el derecho de asociación en sindicatos, que podrán ser patronales, gremiales o profesionales, mixtos o industriales de empresa. Actualmente, se está trabajando en el desarrollo de la nueva Ley General del Trabajo, adecuada al Texto Constitucional, que prevé la sindicalización como un derecho.

49. En relación al derecho a la huelga el Artículo 53 de la CPE, garantiza el derecho a la huelga como el ejercicio de la facultad legal de trabajadoras y trabajadores de suspender labores para la defensa de los derechos, de acuerdo con la ley.

50. Por su parte, el Artículo 105 de la Ley General del Trabajo, determina que en ninguna empresa podrá interrumpirse el trabajo intempestivamente, ya sea por el patrono, o por los trabajadores, antes de haber agotado todos los medios de conciliación y arbitraje, caso contrario el movimiento se consideraría ilegal.

51. En ese entendido, el Artículo 114 de la misma norma, determina que, fracasadas las gestiones de conciliación y arbitraje, los trabajadores podrán declarar la huelga, y los patronos el lock-out, siempre que concurren las siguientes circunstancias: 1) Pronunciamiento de la Junta de Conciliación y del Tribunal Arbitral sobre la cuestión planteada; y, 2) Que la decisión sea tomada por lo menos por tres cuartas partes, del total del servicio activo.

52. Asimismo, la Ley 316 de 11 de diciembre de 2012 (Anexo 12) despenalizó el derecho a la huelga y protege el fuero sindical, derogando el Artículo 234 del Código Penal (CP), que sancionaba a quienes promovían el “lock-out”, huelga o paro declarados ilegales por las autoridades del trabajo, y quedan exentos de responsabilidad penal las y los

³¹ El incremento salarial está dirigido a trabajadoras y trabajadores sin distinción alguna, tomando en cuenta la inflación que se produce en la gestión anterior, pero siempre bajo la premisa de cuidar la economía; y la distribución del poder adquisitivo. Siendo el objetivo fijar un real incremento salarial garantizando las necesidades básicas de los empleados y de sus familias (alimentación, educación, salud, vivienda, vestido y recreación).

dirigentes sindicales y trabajadoras y trabajadores que dentro un conflicto laboral ingresen pacíficamente a establecimientos industriales, agrícolas o mineros en defensa de intereses laborales o conquistas sociales.

Artículo 9

Seguridad Social

53. Respecto a las medidas desarrolladas para el derecho de la seguridad social, se cuenta con información en la Recomendación 31.

Artículo 10

Derechos de las Familias

54. La CPE en su Artículo 62, reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. Asimismo, el Artículo 63, reconoce que el matrimonio se constituye por vínculos jurídicos y se basa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges. Y las uniones libres o de hecho que reúnan condiciones de estabilidad y singularidad producen los mismos efectos que el matrimonio civil, tanto en las relaciones personales y patrimoniales de los convivientes como en lo que respecta a las hijas e hijos adoptados o nacidos de aquellas.

55. En ese sentido, mediante Ley 603 de 19 de noviembre de 2014, se promulgó el Código de las Familias y del Proceso Familiar (“Ley 603”) (Anexo 13), que regula los derechos de las familias, relaciones familiares y derechos, deberes y obligaciones de sus integrantes, sin discriminación ni distinción alguna, como una progresión normativa del Código de Familias de 4 de abril de 1988.

56. En relación a la constitución del matrimonio y la unión libre, el señalado Código en su Artículo 137, establece que son instituciones sociales que dan lugar al vínculo conyugal o de convivencia, orientado a establecer un proyecto de vida común, conllevan iguales efectos jurídicos tanto en las relaciones personales y patrimoniales de los conyugues o convivientes, como el respeto a las y los hijos adoptados nacidos de aquellos.

57. Asimismo, el Artículo 138 del citado Código, prevé: *“Es la libre voluntad de cada persona expresarse sin que medie dolo, error o violencia”*. De igual forma, el Artículo 139 respecto a la edad, determina que se puede constituir libremente matrimonio o unión libre, una vez cumplida la mayoría de edad y de manera excepcional, a los dieciséis (16) años de edad cumplidos, siempre que se cuente con autorización de quienes ejercen la autoridad paternal, o tutores, y ante la falta de estos la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

58. La Ley 475 de 30 de diciembre de 2013, de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia (“Ley 475”) (Anexo 14), en su Artículo 5, determina que las mujeres y hombres mayores de sesenta años y las personas con discapacidad que se encuentren calificadas según el Sistema Informático del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (SIPRUNPCD), tienen derecho a recibir atención médica adecuada.

59. Las personas que obtienen un porcentaje igual o superior 30 % en el proceso de calificación de discapacidad, acceden al Carnet de Discapacidad, documento que acredita la condición de Persona con Discapacidad, y permite acceder a diferentes beneficios como la Atención Integral de Salud en el marco de la Ley 475, que garantiza el acceso a la salud con acciones de promoción, prevención, consulta ambulatoria integral, hospitalización, servicios complementarios de diagnóstico y tratamiento médico, odontológico y quirúrgico, y provisión de medicamentos esenciales, insumos médicos y/o productos naturales tradicionales. Finalmente, con el Carnet de Discapacidad, pueden acceder a cualquiera de los 39 centros de Rehabilitación implementados a nivel nacional.

60. Asimismo, dentro de la seguridad social de corto plazo, toda mujer trabajadora asegurada por una relación de dependencia laboral, tiene derecho a la baja médica prenatal

y postnatal remunerada, así como a la atención médica requerida, conforme el Decreto Ley 13214 de 24 de diciembre de 1975, elevado a rango de Ley 06 de 1 de mayo de 2010 (Anexo 15).

61. El Decreto Supremo 115 de 6 de mayo de 2009 (Anexo 16), reglamenta la Ley 3460 de 15 de agosto de 2006 (“Ley 3460”) (Anexo 17) de Fomento a la Lactancia Materna. Por lo que las instituciones públicas y privadas, deben obligatoriamente permitir a las madres trabajadoras llevar a sus bebés a su fuente laboral en periodo de lactancia, a fin de que proporcionen lactancia materna exclusiva durante los seis (6) primeros meses de vida.

62. De la misma forma, la Ley General del Trabajo, en su Artículo 61, determina que, durante la lactancia, las madres trabajadoras tendrán pequeños periodos de descanso al día no inferiores en total a una hora, asimismo el Artículo 24 de la Ley 3460, establece los subsidios de lactancia materna, destinados a contribuir con la alimentación de mujeres embarazadas o en período de lactancia que no pueden contener sucedáneos de la leche materna, fórmulas infantiles o especiales.

63. Así también, se tiene derecho a las Asignaciones Familiares de acuerdo al Artículo Único del D.S. 3546 de 1 de mayo de 2018³² (Anexo 18), que modifica el Artículo 25 del D.S. 21637, de 25 de junio de 1987 (Anexo 19), estableciendo el pago de Bs2.000.- para los Subsidios: Prenatal, Natalidad, Lactancia y Sepelio.

64. El D.S. 0012 de 19 de febrero de 2009 (Anexo 20), que reglamenta las condiciones de inamovilidad laboral de la madre y padre progenitores que trabajan en el sector público y privado, en su Artículo 2, establece “*La madre y/o padre progenitores, sea cual fuere su estado civil, gozarán de inamovilidad laboral desde la gestación hasta que su hijo o hija cumpla un (1) año de edad, no pudiendo ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo*”.

65. De acuerdo al Seguro Social Obligatorio de Corto Plazo, se concede licencia de paternidad de tres (3) días laborales, a partir del alumbramiento de la conyugue o conviviente a los hombres, con el goce del cien por ciento (100 %) de su total ganado de acuerdo a los previsto por el D.S. 1212 de 1 de mayo de 2012 (Anexo 21).

66. Por otra parte, en relación a la trata y tráfico de personas, la CPE prohíbe la servidumbre, la esclavitud, la trata y tráfico de personas³³; de conformidad con ello, el 2012, entró en vigencia la Ley 263 de 31 de julio, Integral contra la Trata y Tráfico de Personas (“Ley 263”) (Anexo 22)³⁴, por la cual se creó el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas (“el Consejo”), como instancia máxima de coordinación y representación para formular, aprobar y ejecutar la Política Plurinacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas y Delitos Conexos. Pueden destacarse las siguientes acciones realizadas por el Consejo:

- Promovió la suscripción de Acuerdos Bilaterales con Perú³⁵ y Argentina³⁶, para la protección de víctimas de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos, en virtud del Artículo 45 de la Ley 263³⁷;
- Ejecuta el Plan Nacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas 2015-2019, ajustado al nuevo sistema de planificación SPIE, como Plan Multisectorial de Desarrollo Integral para la Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas 2016-2020 (Anexo 23);
- Ejecuta el Programa de Reinserción Laboral de Víctimas de Trata y Tráfico de Personas (Anexo 24);
- Elaboró el Protocolo Único de Atención Especializada a Víctimas de Trata y Tráfico de Personas 2012 (Anexo 25);

³² D.S. 3546, Artículo 25.

³³ CPE, Artículo 15.

³⁴ Ley 263, Artículo 7.

³⁵ Acuerdo Bilateral con Perú firmado y ratificado mediante Ley 765 de 11 de diciembre de 2015.

³⁶ Acuerdo Bilateral con Argentina firmado y ratificado mediante Ley 791 de 28 de marzo de 2016.

³⁷ Ley 263, Artículo 45.

- Elaboró la Guía para la Formulación de Planes Departamentales contra la Trata y Tráfico de Personas 2015 (Anexo 26);
- Elaboró el Protocolo de Repatriación de Víctimas de Trata y Tráfico de Personas de Nacionalidad boliviana en el exterior (Anexo 27).

67. También se difundieron spots preventivos contra la trata y tráfico de personas en medios de comunicación y se realizaron talleres y cursos de capacitación dirigidos a servidores públicos, administradores y operadores de justicia con el objetivo de fortalecer y mejorar la atención a víctimas de trata y tráfico de personas. Además, se crearon Divisiones de Trata y Tráfico de Personas en la Policía Boliviana y está en proceso de aprobación, la actualización del Protocolo Único de Atención Especializada a Víctimas de Trata y Tráfico de Personas y la Ruta de Intervención y se viene trabajando en la construcción y actualización de indicadores sobre el derecho a una vida libre de trata y tráfico.

68. Respecto a los procedimientos establecidos para investigar efectivamente las denuncias relativas a trata y tráfico de personas, la investigación es iniciada por la Fiscalía y la Policía Boliviana; durante la investigación, se realiza toda actuación investigativa a efectos de encontrar a la víctima, autores y partícipes y sancionar el hecho delictivo conforme el CP y la Ley 263³⁸.

69. A efectos de brindar a las víctimas protección en centros de atención integral, asistencia jurídica gratuita y una reparación que incluya su rehabilitación, se cuenta con dos centros de acogida especializados para víctimas en trata y tráfico de personas, uno en el Municipio de Villazón del Departamento de Potosí, y otro en la ciudad de La Paz.

Artículo 11

Nivel de vida adecuado

70. El Artículo 16 de la CPE, dispone: *“I. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación. II. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población”*.

71. Por otra parte, el texto constitucional reconoce en el Artículo 19, el derecho a un hábitat y vivienda adecuada, que dignifiquen la vida familiar y comunitaria; debiendo el Estado, promover planes de vivienda de interés social, mediante sistemas adecuados de financiamiento, basándose en los principios de solidaridad y equidad.

72. En ese entendido, el Estado boliviano, ha definido umbrales de pobreza en base a los productos alimenticios que se encuentran en la canasta básica de alimentos, es decir, se valora el requerimiento de los mismos anualmente con la información que proviene del Índice de Precios al Consumidor que el Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza anualmente, de esta forma, la estimación es actualizada cada año y se cuenta con información de la línea de pobreza moderada y de pobreza extrema³⁹.

73. Los resultados sobre pobreza moderada y extrema, entre 2011 a 2017, reflejan un descenso respecto al indicador de 45.1 % al 36,4 %, y en el caso del segundo indicador, del 21 % al 17,1 % (Anexo 28).

74. Se ampliará información relacionada con la extrema pobreza en la Recomendación 27.

Artículo 12

75. Respecto a las medidas desarrolladas para el derecho de la seguridad social, la información se desarrolla en la Recomendación 34.

³⁸ Ley 263, Artículo 34.

³⁹ La información de pobreza moderada y extrema es generada anualmente por el INE, a través de la Encuesta de Hogares.

Artículos 13 y 14

Derecho a la Educación

76. El Artículo 17 de la CPE, determina que toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación. Estableciendo además que la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad del Estado, con la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

77. Asimismo, el Artículo 81 de la CPE, dispone que la educación es obligatoria hasta el bachillerato; siendo la educación fiscal gratuita en todos sus niveles hasta el superior; debiendo a la conclusión del nivel secundario otorgarse el diplomado de bachiller, con carácter gratuito e inmediato; y el Artículo 82, establece que el Estado garantizará el acceso a la educación y la permanencia de todas las ciudadanas y los ciudadanos en condiciones de plena igualdad.

78. Bajo esa misma línea, la Ley 070 de 20 de diciembre de 2010, de Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” (“Ley 070”) (Anexo 29), se constituye en la Ley Marco del Sistema Educativo del Estado Plurinacional de Bolivia. Teniendo como base al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Artículo 3, establece las bases de la educación en Bolivia, bajo los principios: descolonizadora; comunitaria, democrática y participativa; universal; única, diversa y plural; unitaria, e integradora; laica, pluralista y espiritual; inclusiva; intracultural, intercultural y plurilingüe; productiva y territorial, orientada a la producción intelectual y material; científica, técnica, tecnológica y artística; educación de la vida y en la vida, para el Vivir Bien; promotora de la convivencia pacífica; promueve como principios ético morales de la sociedad plural el ama qhilla (no seas flojo), ama llulla (no seas mentiroso), ama suwa (no seas ladrón); liberadora en lo pedagógico, porque promueve que la persona tome conciencia de su realidad para transformarla.

79. Es así que se elaboró el Currículo Base Plurinacional del Sistema Educativo (Anexo 30), de carácter intracultural, intercultural, plurilingüe, descolonizador, comunitario, territorial, productivo y participativo; y contempla los ejes articuladores: Armonía y Equilibrio con la Madre Tierra; Valores sociocomunitarios; Educación para la Producción y Educación Intracultural, Intercultural y Plurilingüe.

80. El Currículo Base Plurinacional, al ser el primer nivel de concreción de la organización curricular del Sistema Educativo, contempla la formación integral y holística de las y los estudiantes a través del desarrollo de las dimensiones vivenciales del ser⁴⁰, saber⁴¹, hacer⁴² y decidir⁴³.

81. Desde 2005, la inversión del Estado en educación ha logrado un crecimiento de 236 %; focalizándose especialmente en garantizar la cobertura de la educación en los niveles inicial, primaria y secundaria del subsistema de Educación Regular, para todas y todos los estudiantes. De ahí que solo el 11,4 % de las y los estudiantes se encuentran en unidades educativas privadas, por decisión de sus madres/padres o tutores.

82. A partir de 2014, el Ministerio de Educación implementó el Bachillerato Técnico Humanístico en el nivel de Educación Secundaria Comunitaria Productiva de todo el Subsistema de Educación Regular; que consiste en el proceso de formación en áreas Humanísticas y Técnica Tecnológica durante seis años de estudio, de los cuales cuatro trabajan Técnica Tecnológica general y dos Técnica Tecnológica especializada, articulándose a las potencialidades y vocaciones productivas de las regiones y del Estado

⁴⁰ Se recuperan y fortalecen los principios y valores ligados a diferentes tradiciones culturales que transmiten relaciones intergeneracionales incorporadas a las dinámicas educativas.

⁴¹ Se recuperan y desarrollan los saberes y conocimientos locales y universales y se expresa a través de contenidos y ejes articuladores.

⁴² Se desarrollan prácticas manifestadas en actividades y procedimientos técnico, tecnológicos, aplicando saberes y conocimientos con pertinencia sociocultural.

⁴³ Refiere a la educación de la voluntad con sentido comunitario hacia la vida, lo que se expresa en acciones de impacto social con pensamiento crítico, propositivo.

Plurinacional. Hasta el 2007, cerca de 40 mil bachilleres egresaron con el Título de Técnico Medio con validez en todo el territorio del Estado Plurinacional.

83. De igual forma, los estudiantes con alguna discapacidad que cursan el nivel Secundaria Comunitaria Productiva asisten a los Centros de Educación Especial (CED) donde reciben formación técnica; actualmente hay 162 CED, para personas con discapacidad en la modalidad directa, con atención especializada y en modalidad indirecta, en unidades educativas inclusivas con apoyo educativo.

84. Asimismo, el Artículo 93, prevé que las universidades públicas serán obligatoria y suficientemente subvencionadas por el Estado, y el Estado, en coordinación con las universidades públicas, promoverá en áreas rurales la creación y el funcionamiento de universidades e institutos comunitarios pluriculturales, asegurando la participación social.

85. La estructura institucional y académica posibilita la obtención de los méritos, aprendizaje y la valoración de esos logros al igual que las universidades existentes en Bolivia.

86. Entre ellas, la Universidad indígena Apiaguaiki Tupa, que en sus primeros años funcionó en el centro de Macharetí, municipio con importante población Guaraní en el departamento de Chuquisaca. La Universidad Tupak Katari ubicada en Warisata, del departamento de La Paz con importante población Aymara. Y la Universidad Casimiro Huanca, ubicada en el municipio de Chimoré en el Departamento de Cochabamba de población Quechua.

87. El 6 de junio de 2013, se entregó un edificio nuevo en la localidad Ivo Kuruyuki, en el municipio de Macharetí de la provincia chuquisaqueña Luis Calvo. La obra demandó una inversión de Bs.8.658.146, provenientes de la cooperación de Holanda, Suecia, Dinamarca y España y gestionada por el Ministerio de Educación.

88. Actualmente en las mencionadas universidades se desarrollan las siguientes carreras relacionadas a la productividad y desarrollo comunitario: Agronomía Altiplánica, Industria Textil, Zootecnia y Veterinaria, Industria de Alimentos, Agronomía Tropical, Forestal, Piscicultura, e Hidrocarburos, beneficiando a jóvenes estudiantes de pueblos indígenas. Estas Universidades son financiadas con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) destinados a los Naciones y Pueblos Indígenas Originarios (NPIOs).

Artículo 15

Derechos culturales

89. Respecto a los derechos culturales, la CPE reconoce en el Artículo 101 que las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente intangible, gozarán de especial protección del Estado.

90. En ese entendido, el Estado boliviano, a través del Ministerio de Culturas y Turismo, desde 2014, emprendió proyectos de construcción de infraestructura para espacios culturales en las ciudades de Sucre y La Paz.

91. Por otra parte, a efectos de permitir el acceso a la población sobre información del Patrimonio Cultural, se creó una plataforma digital piloto, que contiene información sobre sitios y patrimonios bolivianos declarados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (en inglés *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) (UNESCO), además de políticas y normativa boliviana e internacional relativa a patrimonio de la humanidad.

92. Actualmente, se cuenta con el proyecto: “Centro Plurinacional de Preservación del Patrimonio Cultural” que, en 2019, se constituirá en un espacio que brindará de manera conjunta con la universidad pública, cursos especializados sobre conservación del patrimonio cultural.

93. La Ley 1322 de 13 de abril de 1992, de Derechos del Autor (“Ley 1322”) (Anexo 31), establece herramientas jurídicas para salvaguardar el derecho de los autores sobre las obras del ingenio de carácter original, sean de índole literaria, artística o científica.

Asimismo, la CPE en su Artículo 102, indica: *“El Estado Registrará y protegerá la propiedad intelectual, individual y colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores, inventores científicos, en condiciones que determina la Ley”*.

94. Mediante Ley 1788 de 16 de septiembre de 1998, de “Organización del Poder Ejecutivo” (“Ley 1788”) (Anexo 32), se creó el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), entidad desconcentrada bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural; tiene como funciones: administrar el régimen de la propiedad intelectual en todos sus componentes, mediante una estricta observancia de los regímenes legales de la propiedad intelectual; de la vigilancia de su cumplimiento y de una efectiva protección de los derechos referidos a la propiedad industrial; al derecho de autor y derechos conexos, constituyéndose en la oficina nacional competente respecto de los tratados internacionales y acuerdos regionales suscritos y adheridos por el país, así como normas y regímenes comunes que en materia de propiedad intelectual se han adoptado en el marco del proceso andino de integración. Su organización y funciones se encuentran detalladas en el D.S. 27938 de 20 de diciembre de 2004 (Anexo 33) modificado en parte por el D.S. 28152 de 17 de mayo de 2005.

95. En 2015, la Dirección de Cultura del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz elaboró el Programa de Fortalecimiento Institucional para la Gestión del Patrimonio Cultural en el Departamento de La Paz, el cual dentro de su estructura ha priorizado la construcción e implementación del Sistema Departamental Integral de Información Cultural (SDIIC), que tiene como objetivo fundamental el acceso de la población a datos sobre el patrimonio cultural existente en el Departamento de La Paz, a través de la Batería de Indicadores Culturales, el Sistema de Registro del Patrimonio Cultural, la marca cultural. Dicho programa está siendo sujeto de financiamiento externo y en la gestión 2018 inició su desarrollo.

96. El Gobierno Autónomo Departamental de Potosí informa que, durante 2017, realizó la entrega del edificio denominado Centro Ferial Potosí, cuya infraestructura cuenta con amplios espacios para el desarrollo de eventos feriales y culturales, acceso a salas de cine para eventos alternativos que contribuyen a la realización de actividades culturales en beneficio de toda la población.

IV. Cumplimiento de las recomendaciones del Comité en sus observaciones finales sobre los segundos informes periódicos de Bolivia E/C.12/BOL/2

Recomendación 25

Reforma constitucional

97. Como se mencionó, mediante Referéndum Constitucional de 2009 se aprueba democráticamente la nueva Constitución Política del Estado. Hecho histórico que inicia el proceso de construcción del Estado Plurinacional de Bolivia. Una de las primeras medidas adoptadas es la formulación de un nuevo Régimen Electoral Transitorio y la creación y consolidación del Padrón Electoral Biométrico, mediante Ley 4021, para empadronar a la totalidad de la población boliviana en edad de votar, garantizando transparencia en las elecciones generales que se realizaron a finales del 2009. Como resultado de estas elecciones, Evo Morales es elegido primer presidente del Nuevo Estado Plurinacional.

98. Con la promulgación de la CPE, se abre paso a una infinidad de avances en el reconocimiento de derechos fundamentales de sectores antes relegados, mujeres, jóvenes, indígenas, personas con capacidades diferentes y personas de la tercera edad entre otras, además de reconocer y ampliar los derechos que tienen todas las bolivianas y bolivianos a la alimentación, agua, servicios básicos, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones, hábitat y vivienda entre otros; promoviendo un nuevo modelo de Estado, con bases fundamentales sobre derechos, deberes y garantías con principios y valores incluyentes.

99. La CPE, establece como derechos fundamentales a los Derechos Económicos Sociales y Culturales, otorgándoles garantías jurisdiccionales y acciones tutelares de defensa, como la Acción de Amparo Constitucional, la Acción de Cumplimiento, la Acción Popular⁴⁴, que pueden ser activadas en el caso de vulneraciones.

100. Adicionalmente, la Norma Suprema vigente establece como principio básico el “vivir bien”⁴⁵, paradigma de vida recuperado de saberes ancestrales que pasa a ser oficialmente la directriz para las políticas del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia materializadas a través de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 (Anexo 34) que contempla 13 pilares⁴⁶ para constituir la Bolivia Digna y Soberana, con el objetivo de levantar una sociedad y un Estado más incluyente, participativo, democrático, sin discriminación, racismo, odio, ni división; teniendo como prioridad la atención de las necesidades de la población boliviana, haciendo énfasis en la equiparación de oportunidades de los grupos históricamente excluidos y discriminados.

101. Por otra parte, respecto a la normativa desarrollada por la ALP, en relación con los derechos reconocidos en el Pacto, entre 2009-2017, se destacan las siguientes leyes: Ley 073 de 29 de diciembre de 2010, de Deslinde Jurisdiccional (Anexo 35); Ley 144 de 26 de julio de 2011, de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria (“Ley 144”) (Anexo 36); Ley 200 de 14 de diciembre de 2011, declara el 23 de septiembre “Día Nacional del Pueblo y la Cultura Afroboliviana” (Anexo 37); Ley 300 de 15 de octubre de 2012, Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para el Vivir Bien (Anexo 38); Ley 318 de 12 de diciembre de 2012 (Anexo 39); Ley 338 de 26 de enero de 2013, de Organizaciones Económicas Campesinas, Indígena Originarias - OECAS y Organizaciones Económicas Comunitarias - OECOM para la Integración de la Agricultura Familiar Sustentable y la Soberanía Alimentaria (“Ley 338”) (Anexo 40); Ley 315 de 3 de diciembre de 2012, del Seguro Privado de Vida e Invalidez permanente por accidentes, enfermedades en general u otras causas, para las trabajadoras y los trabajadores de la prensa de Bolivia “Hermanos Peñasco Layme” (Anexo 41); Ley 269 de 2 de agosto de 2012, General de Derechos y Políticas Lingüísticas (“Ley 269”) (Anexo 42); Ley 453 de 4 de diciembre del 2013, General de los Derechos de las Usuaris y los Usuarios y de las Consumidoras y los Consumidores (Anexo 43); Ley 450 de 4 de diciembre de 2013, de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios en Situación de Alta Vulnerabilidad (Anexo 44); Ley 445 de 2 de diciembre de 2013, declara el 5 de septiembre “Día Nacional de la Mujer Indígena Originaria Campesina del Estado Plurinacional de Bolivia” (Anexo 45); Ley 342 de 5 febrero de 2013, de la Juventud”(Anexo 46); Ley 393 de 21 de agosto de 2013, de Servicios Financieros (“Ley 393”) (Anexo 47); Ley 395 de 26 de agosto 2013, Centro Internacional de la Quinoa (Anexo 48); Ley 465 de 19 de diciembre de 2013, del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia (Anexo 49); Ley 475 de 30 de diciembre 2013, de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia (Anexo 50); Ley 516 de 4 de abril de 2014, de Promoción de Inversiones (Anexo 51); Ley 530 de 23 de mayo de 2014, del Patrimonio Cultural Boliviano (Anexo 52); Ley 622 de 29 de diciembre de 2014, de Alimentación Escolar en el Marco de la Soberanía Alimentaria y Economía Plural (“Ley 622”) (Anexo 53); Ley 650 de 15 de enero de 2015, Agenda Patriótica 2025 (Anexo 54); Ley 745 de 5 de octubre de 2015, de la Década de Riego 2015-

⁴⁴ CPE, Artículos 125 al 129 y 135 al 136.

⁴⁵ CPE, Artículo 8.I.

⁴⁶ 1. Erradicación de la pobreza extrema; 2. Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para Vivir Bien; 3. Salud, educación y deporte para la formación de un ser humano integral; 4. Soberanía científica y tecnológica con identidad propia; 5. Soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capitalismo financiero; 6. Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista; 7. Soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización, industrialización y comercialización en armonía y equilibrio con la Madre Tierra; 8. Soberanía alimentaria a través de la construcción del saber alimentarse para Vivir Bien; 9. soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre Tierra; 10. Integración complementaria de los pueblos con soberanía; 11. Soberanía y transparencia en la gestión pública bajo los principios de no robar, no mentir y no ser flojo; 12. Disfrute y felicidad plena de nuestras fiestas, de nuestra música, nuestros ríos, nuestra selva, nuestras montañas, nuestros nevados, de nuestro aire limpio, de nuestros sueños; 13. Reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y nuestro mar.

2025 (Anexo 55); Ley 755 de 28 de octubre de 2015, de Gestión Integral de Residuos (Anexo 56); Ley 775 de 8 de enero de 2016, de Promoción de Alimentación Saludable (Anexo 57); Ley 777 de 21 de enero de 2016, Del Sistema de Planificación Integral del Estado - SPIE (Anexo 58); Ley 786 de 9 de marzo de 2016, Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, en el Marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien (Anexo 59); Ley 804 de 11 de mayo de 2016, Nacional del Deporte (Anexo 60); Ley 824 de 25 de agosto de 2016, de Modificación a la Ley 150 de 11 de julio de 2011, Día Nacional del Peatón y del Ciclista en Defensa de la Madre Tierra (Anexo 61); Ley 830 de 6 de septiembre de 2016, de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Anexo 62); Ley 906 de 8 de marzo de 2017, General de la Coca (Anexo 63); Ley 920 de 27 de marzo de 2017, de la Bandera de Reivindicación Marítima del Estado Plurinacional de Bolivia (Anexo 64); Ley 947 de 11 de mayo de 2017, de Micro y Pequeñas Empresas (Anexo 65); Ley 974 de 4 de septiembre de 2017, de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (Anexo 66).

Recomendación 26

Indicadores en Derechos Humanos

102. Desde 2012, el MJTI de manera conjunta con el INE, trabajan en el desarrollo de indicadores en derechos humanos que permitan al Estado Plurinacional de Bolivia, realizar un monitoreo más preciso sobre la situación en derechos humanos, Inicialmente se trabajaron indicadores para 6 derechos con la participación de 30 instituciones estatales, como resultado de buenas prácticas y la validación de la metodología participativa de trabajo, en 2014 se asumió el reto de generar indicadores para otros tres derechos. En 2015, se renovó el Convenio de Cooperación, que finalizará el 2020.

103. Como resultado, al 2018 se validaron más de 400 indicadores (estructurales, de proceso y resultado), para los siguientes nueve derechos priorizados: Salud; Vivienda; Trabajo; Alimentación; Educación; Agua y Saneamiento; Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Una Vida Libre de Trata y Tráfico; y, Acceso a la Justicia y Juicio Justo⁴⁷.

Recomendación 27

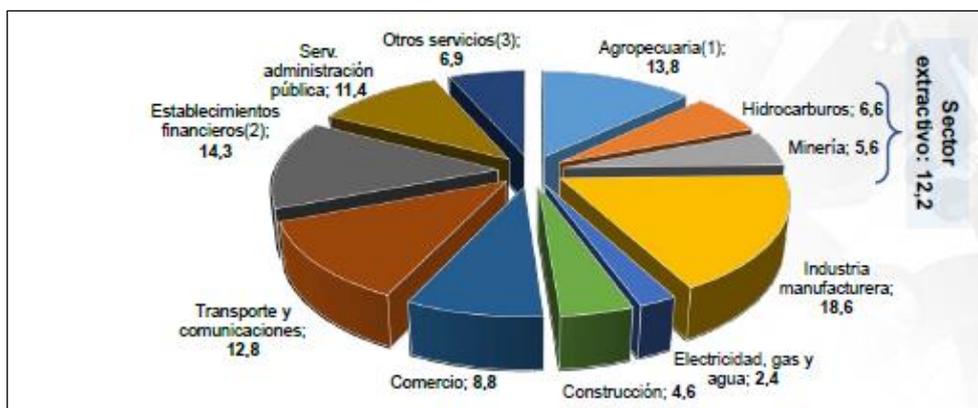
Extrema pobreza

104. Desde 2006, el Estado boliviano implementó el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), basado en políticas económicas enfocadas a fomentar la demanda interna a través de una mayor inversión pública; una política redistributiva focalizada en un incremento del salario mínimo por encima de la inflación que promueva el consumo; la elevada inversión pública que pretende maximizar la actividad productiva; y las transferencias monetarias condicionadas a los estratos más vulnerables como los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy, Renta Dignidad y Renta Solidaria, junto a un fuerte crecimiento del crédito gracias a la Ley de Servicios Financieros que estuvo acompañada por una política monetaria de carácter expansivo y otras políticas sectoriales del Órgano Ejecutivo.

105. Al 2017, se logró por quinto año consecutivo, una de las mayores tasas de crecimiento económico de la región, el 4,2 %⁴⁸, registrando además un crecimiento económico sostenido en los últimos 12 años, debido al favorable desempeño de los sectores no extractivos que representaron más del 80 % de la producción nacional, es decir, al 2017 la industria manufacturera representó el 18,6 % del producto; el sector de establecimientos financieros el 14,3 %; el sector agropecuario el 13,8 % y transportes y comunicaciones el 12,8 %; estas actividades además de construcción, comercio, servicios básicos y otras, corresponden a la demanda interna y son generadoras de empleo y representan un crecimiento positivo, como se puede verificar a continuación:

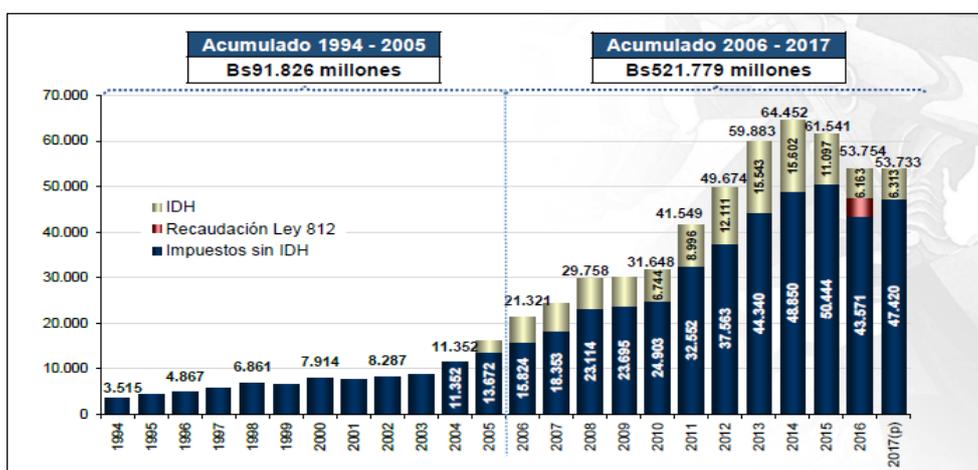
⁴⁷ <http://www.ine.gob.bo/indicadoresddhh/>.

⁴⁸ Desempeño destacado por el Fondo Monetario Internacional.



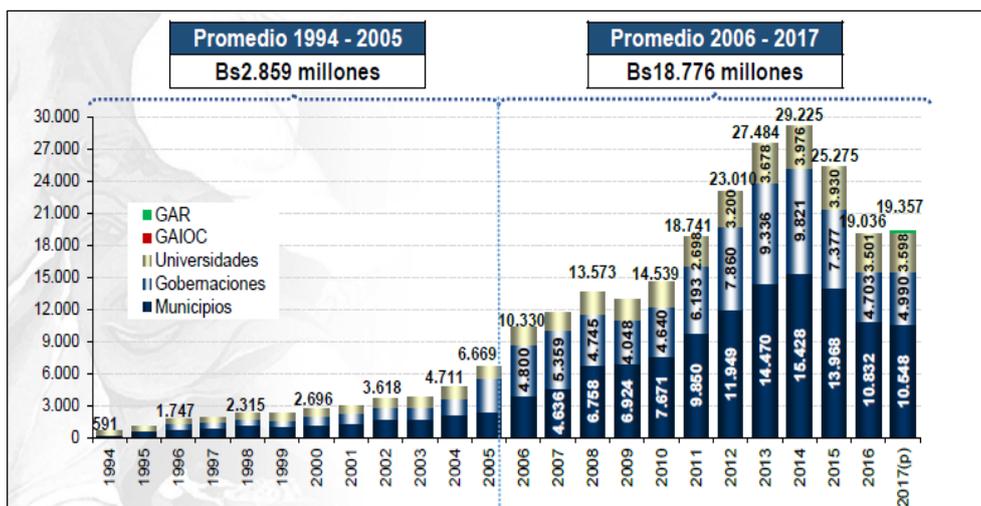
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; Revista ECOS: De Estabilidad Económica con el Mayor Crecimiento de la Región; Año 4 – 47 – 2018.

106. Asimismo, las recaudaciones tributarias entre 2006 y 2017 ascendieron a Bs.521.779 millones, superando en más de cinco veces en relación al periodo 1994-2005 de Bs.91.826 millones.



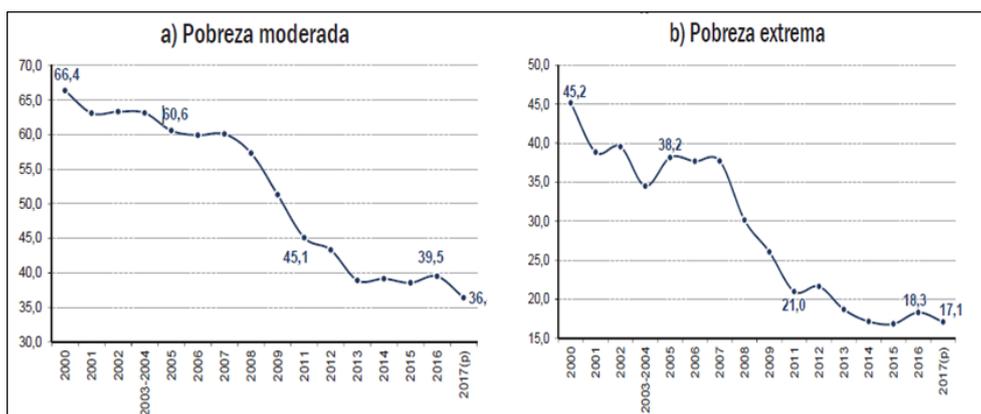
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; Revista ECOS: De Estabilidad Económica con el Mayor Crecimiento de la Región; Año 4 – 47 – 2018.

107. Por otro lado, con la recuperación de los recursos estratégicos, los niveles de recaudación tributaria y el crecimiento de los hidrocarburos y minerales, los Gobiernos Autónomos y Universidades Públicas se beneficiaron con mayores recursos por concepto de regalías y transferencias del Tesoro General de la Nación (TGN), con un promedio de Bs.18.776 millones entre 2006 a 2017, superior en 557 % respecto al promedio de Bs.2.859 millones del periodo 1994-2005. En ese entendido, en 2017, se transfirieron recursos al Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino de Charagu Iyambae y al Gobierno Autónomo Regional de Gran Chaco.



Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; Revista ECOS: De Estabilidad Económica con el Mayor Crecimiento de la Región; Año 4 – 47 – 2018.

108. En el marco del MESP, se desarrollaron políticas sociales orientadas a reducir la pobreza y la desigualdad de ingresos, que permitan mejorar la calidad de vida de bolivianas y bolivianos. En ese entendido, la pobreza moderada sobre el total de la población, redujo del 60,6 % en 2005 a 36,4 % en 2017 con una diferencia de 24,2 puntos porcentuales; y la extrema pobreza en Bolivia, disminuyó de 38,2 % en 2005 a 17,1 % en 2017, es decir, con una reducción de 21,1 puntos porcentuales.

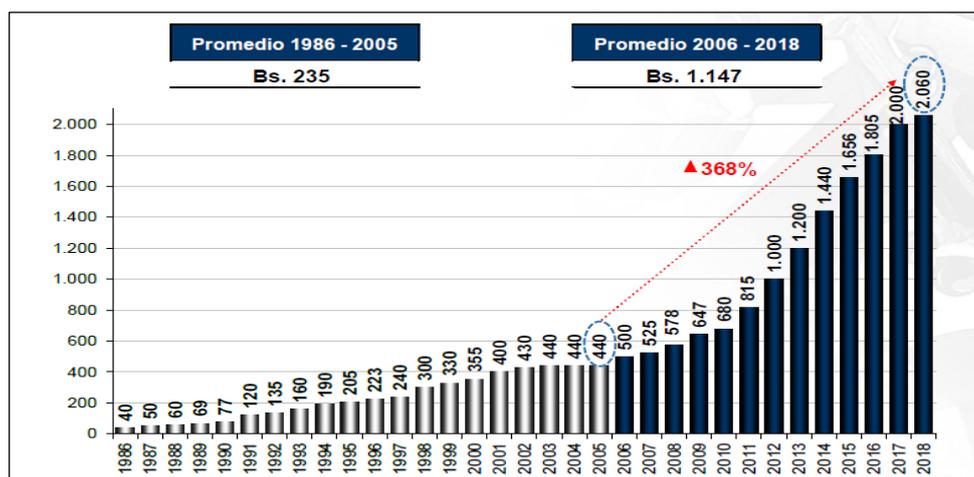


Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Memoria de la Economía Boliviana 2017.

109. La tasa de desempleo redujo de 8,1 % en 2005 a 4,5 % en 2017, posicionando a Bolivia como el país con la menor tasa de desempleo de América Latina; la política salarial, determinó un aumento del Salario Mínimo Nacional que pasó de Bs.440 en 2005 a Bs.2060 en 2018, representando un 368 % de incremento, como se demuestra a continuación:

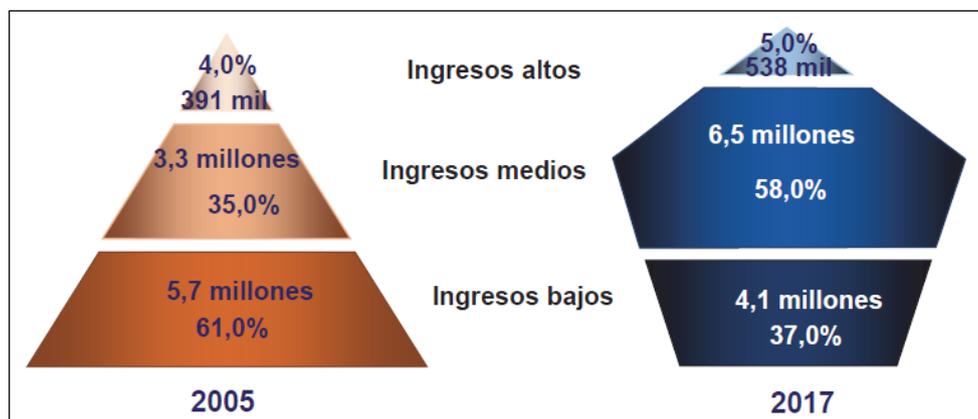


Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; Revista ECOS: De Estabilidad Económica con el Mayor Crecimiento de la Región; Año 4 – 47 – 2018.



Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; Revista ECOS: De Estabilidad Económica con el Mayor Crecimiento de la Región; Año 4 – 47 – 2018.

110. En relación con los ingresos económicos de bolivianas y bolivianos, se registró un incremento del 4 % equivalente a 391.000 personas con ingresos altos en 2005, a un 5 % equivalente a 538 mil personas en 2017; de 35 % relativo a 3,3 millones de personas con ingresos medios en 2005 a 58 % equivalente a 6,5 millones de personas en 2017; y, un descenso del 61 % equivalente a 5,7 millones de personas con ingresos bajos en 2005 a 37 % correspondiente a 4,1 millones de personas con ingresos bajos en 2017.



Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Memoria de la Economía Boliviana 2017.

111. En ese entendido, cabe destacar el incremento del ahorro financiero que en 2017 registró \$us25.945 millones, motivo por el cual, se tiene alrededor de 10,3 millones de cuentas de depósito en el sistema financiero en 2017, de las cuales, el 87 % corresponden a captaciones con saldos menores a \$us500, reflejando la capacidad de ahorro de la población de ingresos medios y bajos⁴⁹.

112. Los créditos del sistema financiero incrementaron de \$us3.360 millones a \$us22.901 millones entre 2005 y 2017, debido a los préstamos de las entidades financieras para el fortalecimiento del sector productivo y para el acceso a una vivienda propia en el marco de la Ley 393; asimismo, se cuenta con bajos niveles de mora, disminuyendo éstos de 10,1 % en 2005 a 1,7 % en 2017, lo que refleja la capacidad de pago de los prestatarios⁵⁰.

113. Por otro lado, el Estado boliviano estableció como principales transferencias condicionadas en efectivo, las siguientes⁵¹.

- Bono Juancito⁵², es una transferencia monetaria anual directa de Bs.200 al cumplir el 80 % de asistencia mínima del año escolar y así fomentar el acceso, permanencia y finalización de los estudios escolares de las niñas, niños y jóvenes, duplicando el número de beneficiarios de 1.084.967 de estudiantes en 2006 a 2.184.436 en 2017, con un crecimiento porcentual de 11,6 % a 19,6 % de la población estudiantil beneficiada;
- Renta Dignidad⁵³, renta universal de vejez, en base a una pensión vitalicia no contributiva mensual, a la cual accede toda persona mayor de 60 años de edad, residente en Bolivia. El pago vitalicio mensual para Rentistas asciende a Bs.250 y para personas No Rentistas a Bs.300, por lo que el monto acumulado anual es de Bs.3.250 y Bs.3.900 para cada uno de los grupos señalados. En ese entendido, desde 2008 hasta diciembre de 2017, a nivel nacional, se cuenta con más de 1,3 millones de adultos mayores beneficiados, de los cuales el 83,2 % pertenece a la población que no percibe una renta de jubilación y el 16,8 % a personas rentistas. El monto total pagado de la Renta Dignidad, ascendió a Bs.22.841 millones que fueron financiados con el Fondo de la Renta Dignidad de Vejez (FRUV), recursos que provienen de dos fuentes: a) Recursos percibidos del IDH de los GAD, GAM, Fondo Indígena y TGN; y, b) Dividendos de las empresas públicas nacionalizadas;
- Bono Juana Azurduy⁵⁴, cuyo propósito es mejorar la salud y nutrición de las mujeres gestantes y de niñas y niños menores a dos años de edad que no cuenten con seguro

⁴⁹ Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; Revista ECOS: De Estabilidad Económica con el Mayor Crecimiento de la Región; Año 4 – N° 47 – 2018; pp. 27 (Anexo 67).

⁵⁰ Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; Revista ECOS: De Estabilidad Económica con el Mayor Crecimiento de la Región; Año 4 – N° 47 – 2018; pp. 30.

⁵¹ Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; Memoria de la Economía Boliviana 2017; pp 205 – 222 (Anexo 68).

⁵² Creado mediante D.S. N° 28899 de 26 de octubre de 2006 (Anexo 69).

⁵³ Creada mediante Ley 3791 de 28 de noviembre 2007 (Anexo 70).

⁵⁴ Creado mediante D.S. 0066 de 3 de abril de 2009 (Anexo 71).

médico; constituyéndose en un incentivo económico que estimula la asistencia de las madres a los centros de salud para reducir la mortalidad materna e infantil y desnutrición crónica que consiste en el pago de Bs.50 por cada control prenatal, teniendo que asistir a cuatro en total, asimismo, por el parto y post parto asistido por personal médico, se otorga Bs.120 y doce pagos bimensuales de Bs.125 por cada control de niñas o niños hasta los dos años, haciendo un total de Bs.1.820 en un periodo aproximado de 33 meses. En ese entendido, de 2009 a 2017, se cuenta con 1.955.823 de beneficiarios, de los cuales 846.202 son madres y 1.109.621 niñas y niños;

- Hasta diciembre de 2017, el 48,9 % de la población total, equivalente a 5,4 millones de personas, se beneficiaron con algún bono social, cerca de 300.000 personas adicionales en relación a 2016. Por otro lado, con el fin de mejorar las condiciones y la calidad de vida de bolivianas y bolivianos, a través del Programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple”⁵⁵, entre 2007 y 2017, se realizaron 8.415 proyectos en diferentes áreas en todo el territorio nacional, ascendiendo a un total de Bs. 14.679 millones, de los cuales, el 43,3 % corresponde a educación, el 25,6 % a deporte, el 10,4 % a infraestructura social, a productivos 9,1 %, y a salud el 5,8 %;
- Programa “Yo sí puedo seguir”⁵⁶, que contempla dos componentes: a) Alfabetización enfocada a la población analfabeta remanente; que entre 2009 y 2017, alfabetizó a 195.036 personas; y, b) Post alfabetización, en todo el país y diferentes idiomas; habiéndose entre 2009 y 2017, graduado 339.815 personas, siendo el 62 % graduados de 3^{ro} de primaria y el 38 % graduados de 6^o de primaria;
- Programas de vivienda social⁵⁷, cuya implementación entre 2006 y 2017, permitió un total de 128.027 viviendas sociales construidas y/o mejoradas en el país, lo que reflejó un crecimiento de 147,1 % respecto al periodo 1987-2005, en el cual se construyeron 51.821 viviendas;
- Programa “Más Inversión para el Agua, Mi Agua I, II, III y IV”⁵⁸, cuyo objeto es incrementar la producción agropecuaria y generar mayor bienestar para los bolivianos, ejecutándose 3.172 proyectos en 336 municipios del país, de los cuales 2.234 corresponden a agua potable y saneamiento, habiéndose logrado en las cuatro fases del programa, 273.274 conexiones domiciliarias, 7.777 piletas públicas y 43.611 ha bajo riego, que beneficiaron a 437.660 familias a nivel nacional; ascendiendo a Bs.3.253 millones;
- Programa “Más Inversión para el Riego: Mi Riego”⁵⁹, dirigido a la actividad agrícola expuesta a condiciones climáticas adversas como la sequía, su objeto es lograr mayor producción de cultivos y combatir la pobreza de familias; desde 2014 hasta el 2017 se realizaron 295 proyectos de riego en 140 municipios, logrando incrementar el riego en 29.307 ha, beneficiando a 37.685 familias; ascendiendo a una inversión de Bs.1.454 millones;
- Con el fin de incrementar la cobertura del servicio de electricidad y facilitar la accesibilidad de los hogares de menores ingresos que viven en las áreas urbana y rural; desde 2006 se implementó el programa “Tarifa Dignidad”⁶⁰, que es un descuento del 25 % del importe total facturado por consumo mensual de electricidad a los hogares que consumen hasta 70 Kilovatios/hora; en ese sentido, a 2017 se registró un incremento de 7,2 % en la cantidad de hogares beneficiados, lo que significó 78.567 nuevos hogares en relación 2016; asimismo, el monto de descuento aplicado incrementó en 10 % de Bs.88 millones a Bs.97 millones.

⁵⁵ Tiene por finalidad financiar proyectos de infraestructura y equipamiento en las áreas de salud, educación, infraestructura social, productiva, riego, saneamiento básico, infraestructura vial y deporte, para mejorar la calidad de vida de los bolivianos.

⁵⁶ Creado mediante D.S. 004 de 11 de febrero de 2009 (Anexo 72).

⁵⁷ Creado mediante D.S. 28794 de 12 de julio de 2006 (Anexo 73).

⁵⁸ Creado mediante D.S. 0831 de 30 de marzo de 2011 (Anexo 74).

⁵⁹ Creado mediante D.S. 2215 de 17 de diciembre de 2014 (Anexo 75).

⁶⁰ Creada Mediante D.S. 28653 de 21 de marzo de 2006 (Anexo 76).

Salario mínimo

114. Como se mencionó en el párrafo 46 y siguientes del presente informe, desde 2006, el Estado boliviano, ha emitido normativa que dispone el incremento salarial para trabajadoras y trabajadores sin distinción alguna. En relación con la canasta familiar.

Prevención contra la violencia a la niñez

115. Por otro lado, la CPE establece en el Artículo 60, que es deber del Estado, la sociedad y la familia, garantizar la prioridad del interés superior de NNA; asimismo, a través del Artículo 61.I, se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra NNA.

116. En virtud a los mandatos constitucionales, el Estado desarrolló las siguientes medidas legislativas: Ley 548 de 17 de julio de 2014, “Código Niña, Niño y Adolescentes” (“Ley 548” “CNNA”) (Anexo 77), que tiene por objeto reconocer, desarrollar y regular el ejercicio de los derechos de NNA, a través de la implementación de un Sistema Plurinacional Integral para garantizar esos derechos mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles, la familia y la sociedad.

117. En ese sentido, el CNNA crea el Sistema Plurinacional Integral de la NNA (SPINNA), conformado por el Sistema Plurinacional de Protección Integral de NNA (SIPROINA) y el Sistema Penal para Adolescentes.

118. El SIPROINA, es el conjunto articulado de órganos, instancias, instituciones, organizaciones, entidades y servicios, encargado de ejecutar el Plan Plurinacional de la NNA, cuyo objetivo es garantizar el pleno goce de los derechos de las NNA⁶¹.

119. El Sistema Penal para Adolescentes, es el conjunto de instituciones, instancias, entidades y servicios encargados del establecimiento de responsabilidad de personas adolescentes por conductas punibles en que incurra, y de la aplicación y control de las medidas socio educativas; este sistema ejecuta el Plan Plurinacional de la NNA en lo pertinente⁶².

120. Por otra parte, se puso en vigencia el D.S. 2377 de 27 de mayo de 2015, Reglamento al Código Niña, Niño y Adolescente (“D.S. 2377”) (Anexo 78), que contempla entre otros, lineamientos y mecanismos para la protección y garantía de los derechos de las NNA.

121. En consecuencia, se implementaron las siguientes medidas por el Estado:

- La Estrategia Comunitaria de Protección de NNA en la JIOC, a través del Viceministerio de Justicia Indígena Originaria Campesina (en 2014), que sensibilizó a las autoridades indígenas sobre la prevención de la violencia en las comunidades y obtuvo como resultado, el incremento de la cobertura de acción de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia;
- La Estrategia del Promotor Comunitario, por la cual, los miembros de los PIOC y promotores comunitarios deben coordinar con sus autoridades sobre la atención y derivación de casos de vulneración de derechos de NNA. En el marco de esta estrategia, se capacitó entre 2014 y 2017 a 1.672 personas entre autoridades indígena originario campesinas, servidores públicos y promotores comunitarios.

122. Por otra parte, en el marco de los mandatos constitucionales, la normativa señalada, la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 y el SPIE, se desarrolló el Plan Plurinacional de la NNA, que tiene por objeto, a través del accionar intersectorial, generar las condiciones para garantizar una real inclusión con identidad de género, generacional y étnica cultural; asimismo, se enmarca en la doctrina de protección para el desarrollo integral y la promoción del protagonismo de NNA; en el enfoque de justicia restaurativa; y la convivencia hacia el “Vivir Bien”.

123. Así también, se constituyó el Consejo de Coordinación Sectorial e Intersectorial para Temas de NNA, como espacio de decisiones vinculantes a instituciones públicas y privadas de coordinación y articulación del diseño, implementación y monitoreo de políticas, planes,

⁶¹ Ley 548, Artículo 160.

⁶² Ley 548, Artículo 259.

estrategias, programas, proyectos y normativa para este grupo poblacional, como promoción de acuerdos para su desarrollo⁶³.

124. Del mismo modo, en el marco del CNNA se crearon los Comités de la NNA como instancias de participación social, conformadas por representantes de organizaciones estudiantiles y de otras organizaciones de NNA; habiéndose conformado 9 Comités Departamentales y 145 Municipales hasta 2016.

125. En 2017, esos Comités, constituyeron a través de un proceso democrático y participativo, al Comité Plurinacional de la NNA (CPNNA) conformado por 18 adolescentes (9 mujeres y 9 nueve varones), que en 2018 elaboró y aprobó su Reglamento de Funcionamiento y Plan de Trabajo para la misma gestión. En ese entendido, participa en la elaboración, seguimiento y monitoreo de las políticas, planes, programas, proyectos, acciones y normativas dirigidas a niñas, niños y adolescentes a nivel departamental y municipal.

126. Asimismo, se cuenta con Defensorías de la Niñez y Adolescencia, instancia de protección dependiente de los gobiernos municipales, que prestan servicios públicos de defensa psico-socio-jurídica gratuitos, para garantizar a NNA la vigencia de sus derechos, a través de equipos interdisciplinarios de abogados, trabajadores sociales, psicólogos y otros profesionales relacionados con la temática⁶⁴. Por otro lado, se cuenta con las siguientes medidas destinadas a erradicar la violencia y el maltrato contra NNA: 1. Lineamientos Estratégicos del Buen Trato, que define las estrategias nacionales del sector salud, para contribuir en la reducción de la violencia en personas, familias y comunidades, como un importante problema de salud pública, en el marco de la política sectorial de “Salud Familiar Comunitaria Intercultural”; 2. Cartilla informativa “Buen trato para la protección de NNA”, dirigida al personal de salud; 3. Cartilla, “Buen Trato para Prevenir la Violencia en la Crianza en la Primera Infancia”, dirigida al personal de establecimientos de Salud, del Programa Bono Juana Azurduy, de las Unidades de Desarrollo Infantil Temprano y Prestadores de la Medicina Tradicional Ancestral Boliviana; cuyas actividades podrán ser aplicadas en coordinación con aliados estratégicos como ser: Personal del Sistema Educativo, de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, de los Servicios Legales Integrales Municipales y personas que trabajen con madres, padres, tutores legales, cuidadoras/es de niñas y niños menores de 8 años de edad y otras instancias identificadas como aliados estratégicos de corresponsabilidad; y, 4. Cartilla para Promover la Autoprotección de Niñas y Niños de 6 a 8 años “Me comprometo para la protección y prevención de las violencias contra niñas y niños”, herramienta derivada de la Estrategia del Buen Trato, cuya aplicación contribuye a las actividades cotidianas de salud para impulsar la autoprotección de niñas y niños de 6 a 8 años.

127. Por otro lado, se adoptaron las siguientes medidas: Bono Madre Niño, Niña “Juana Azurduy”, que tiene por objeto, hacer efectivos los derechos fundamentales de acceso a la salud y desarrollo integral de los y las niñas, para disminuir los niveles de mortalidad materna e infantil y la desnutrición crónica de los niños y niñas menores de 2 años; es un incentivo que perciben todas las madres bolivianas que no cuentan con un seguro de salud; el Subsidio Universal Prenatal por la Vida, para mujeres gestantes que no están registradas en ningún seguro social de corto plazo, cuya finalidad es mejorar la salud materna y reducir la mortalidad neonatal; en 2017, se registraron 64.909 beneficiarias en todo el país.

128. El Estado boliviano, a efectos de identificar la magnitud y situación de violencia contra la niñez, cuenta con las siguientes fuentes de información: Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS)⁶⁵, Encuesta de Demografía y Salud (EDSA)⁶⁶; denuncias de hechos de violencia a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV)⁶⁷ y,

⁶³ Presidido por el MJTI y cuenta con el apoyo de una Secretaría Técnica a cargo del VIO.

⁶⁴ Ley 548, Artículos 186 – 188.

⁶⁵ El SNIS es administrado por el Ministerio de Salud y posee información relativa a casos de violencia hacia personas menores de 10 años, registrados en los centros de salud.

⁶⁶ Encuesta EDSA, realizada por el INE en 2016, indaga sobre el castigo físico y psicológico ejercido por los padres u otros hacia los niños y niñas en el hogar.

⁶⁷ Unidad dependiente de la Policía Boliviana.

registro de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, a cargo de los Gobiernos Autónomos Municipales (GAM).

129. De conformidad con la CPE, queda prohibida y se sanciona toda forma de violencia contra NNA; asimismo, se prohíbe el trabajo forzoso y la explotación infantil; motivo por el cual, las actividades realizadas por NNA deben estar orientadas a su formación integral como ciudadanas y ciudadanos, debiendo ser funciones formativas, por lo que, sus derechos, garantías y mecanismos institucionales de protección son objeto de regulación especial⁶⁸.

Lucha contra el trabajo infantil

130. El Estado desarrolló políticas gubernamentales, programas sociales y otros mecanismos de lucha contra el trabajo infantil, así, la Política contra el Trabajo Infantil, que cuenta con un enfoque de protección, teniendo como premisa el interés superior del NNA, habiendo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) asignado para 2015, el 13,6 % del Presupuesto General de la Nación.

131. Por su parte el Ministerio de Educación, implementó diferentes políticas, programas y proyectos, a objeto de garantizar el acceso y permanencia de las y los estudiantes en el Sistema Educativo, entre ellos:

- Bono Juancito Pinto, que durante 2017, tuvo un presupuesto de Bs.442.381.800,00⁶⁹, cuyo objetivo es contribuir a la disminución de la tasa de deserción escolar, incentivando la matriculación, permanencia y culminación del año escolar de los estudiantes en Bolivia;
- Bachillerato Modular Multigrado; busca garantizar el ejercicio del derecho a la educación de los estudiantes que viven en lugares alejados o de difícil acceso;
- Bono Excelencia Académica; incentiva a los estudiantes de todo el Sistema Educativo Plurinacional, a lograr excelencia académica a través de la otorgación de bonos y becas;
- Programas de Escuelas de Frontera, Liberadora y de Rivera de Río; que tienen por objeto, detener la deserción escolar y evitar la migración;
- Programa para Atención de NNA trabajadores; para eliminar el rezago escolar, garantizar la culminación de la secundaria y la otorgación de becas para educación superior;
- Becas para Formación Superior; como apoyo directo para los estudiantes de poblaciones más vulnerables para que continúen con su formación superior.

132. El Estado, de manera efectiva y sostenida, implementó acciones institucionales desarrolladas por los inspectores de trabajo en base a tres estrategias: Prevención, mediante el desarrollo de capacidades en la aplicación de los derechos fundamentales orientadas a NNA de unidades educativas, padres de familia, maestros, trabajadores y empleadores; Fiscalización, realizándose inspecciones laborales e integrales de oficio o a instancia de parte, donde se encuentran NNA trabajadores; y, Acción directa en la protección de la integridad de NNA en situación de trabajo, por la cual, se realizan audiencias para restituir sus derechos fundamentales y laborales.

133. Enmarcándose en el Convenio 138 de la OIT, la SCP 0025/2017 del TCP declara inconstitucional el Artículo 129.II del CNNA, dejando sin efecto las excepciones a la actividad laboral de NNA por cuenta propia. Por otro lado, el CNNA establece que los trabajadores menores de 18 años gozarán, además de sus derechos específicos como NNA, de todos los derechos socio laborales vigentes.

⁶⁸ CPE; Artículo 61.I.

⁶⁹ <http://www.comunicacion.gob.bo/sites/default/files/media/publicaciones/BOLIVIA%202025%20TITULOS%20EDITADOS%20redes.pdf>.

Protección de derechos de los trabajadores

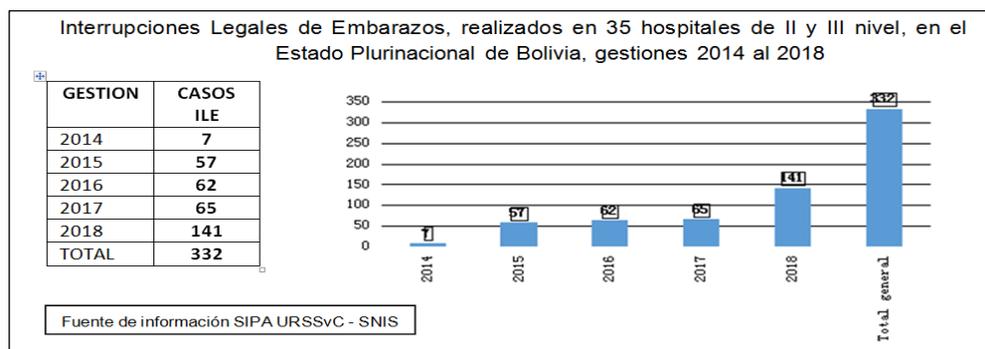
134. A través del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social (MTEPS), se implementó un sistema de oficinas móviles temporales en zonas alejadas, con el objetivo de restituir los derechos de los trabajadores, y cuando se reciben denuncias se realizan inspecciones, se instalan audiencias, se proporciona información y se realizan capacitaciones en la aplicación de derechos laborales, dirigidas a adolescentes, jóvenes, padres de familia y población en general. En 2016 y 2017, se establecieron 26 oficinas móviles temporales en municipios rurales del Oriente y del Chaco boliviano.

135. El Estado boliviano reconoce que toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna; como a una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias.

Reducción de mortalidad de las mujeres a causa de abortos clandestinos

136. El 5 de febrero de 2014, el TCP emitió la SCP 0206/2014, determinando la modificación del tipo penal de aborto impune declarando inconstitucional la autorización judicial en esos casos⁷⁰, en todos ellos, el aborto deberá ser practicado por un médico con el consentimiento de la mujer. Para dar cumplimiento a lo establecido por el TCP, el Ministerio de Salud elaboró el Documento Normativo “Procedimiento Técnico para la Prestación de Servicios de Salud en el Marco de la SCP 0206/2014”, dirigido al personal de salud a nivel nacional para proceder a las interrupciones legales del embarazo.

137. En las gestiones 2015, 2016 y 2017, se implementó un plan de capacitación para el personal médico en el Modelo de Atención a Víctimas de Violencia Sexual y la SCP mencionada, incluyendo el registro en el Sistema de Información Perinatal- Aborto (SIPA) implementado en 35 Hospitales de II y III nivel, que refleja los siguientes datos:



138. El Ministerio de Salud está trabajando en la generación de las siguientes herramientas y documentos para fortalecer el desenvolvimiento del personal de salud a la hora de la consulta con adolescentes y jóvenes: 1. Norma Nacional de Atención Clínica; 2. Atención Integrada al Continuo del Curso de la Vida; 3. Guía Nacional de Atención Integral y Diferenciada de Adolescentes y Jóvenes; 4. Norma nacional, reglas, protocolos y procedimientos en anticoncepción; 5. Modelo de Atención Íntegra a la Víctimas de Violencia Sexual; 6. Plan Andino para la Prevención y Reducción del Embarazo en Adolescentes 2017-2020; 7. Plan Plurinacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes y Jóvenes -PPPEAJ 2015-2020.

139. El PPPEAJ 2015-2020⁷¹, tiene como objetivo reducir el embarazo en adolescentes y jóvenes, favoreciendo el ejercicio de los derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos. Para su ejecución efectiva, se elaboró la estrategia de cumplimiento de la SCP 206/2014 y los lineamientos para el funcionamiento de la plataforma nacional de

⁷⁰ SCP 0206/2014 de 5 de febrero de 2014, que resuelve: “1° Declarara la INCONSTITUCIONALIDAD (...) y de las frases “... siempre que la acción penal hubiere sido iniciada” del primer párrafo y “... y autorización judicial en su caso”, del párrafo tercero del art. 266 del CP y manteniendo incólume en lo demás el citado artículo, conforme el procedimiento de denuncia establecido en el Fundamento Jurídico III.8.8 del presente fallo”.

⁷¹ Resolución del Comité Interministerial de Políticas Públicas de la Juventud N° 002/2015.

Prevención de Embarazos en Adolescentes y Jóvenes, además de socializaciones a nivel nacional, que contaron con la participación de un total de 571 personas de organizaciones de la juventud, instituciones públicas y privadas de los diferentes departamentos del país. Igualmente, se llevó adelante la “Campaña de Prevención de Violencia y Responsabilidad”, para sensibilizar a la población sobre la prevención de violencia, embarazos no planificados e infecciones de transmisión sexual ITS/VIH-SIDA y durante las gestiones 2016 y 2017, se declaró la última semana de septiembre, como la semana de prevención de embarazos en adolescentes y jóvenes, habiéndose llevado a cabo talleres y socializaciones sobre el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, el uso de métodos anticonceptivos y capacitaciones en su proyecto de vida.

Alfabetización

140. Mediante D.S. 28675 de 13 de abril de 2006, se implementó el Programa Nacional de Alfabetización “*Yo, si puedo*”, logrando alfabetizar a 824.101 personas, durante las gestiones 2006 y 2008; reduciendo la tasa de alfabetismo a 3,7 %, cifra que permitió el año 2008, declarar a Bolivia “*Territorio Libre de Analfabetismo*”.

141. Asimismo, la política educativa y para atender el analfabetismo residual y evitar el retroceso de las estadísticas, actualmente, la Dirección General de Post Alfabetización dependiente del Viceministerio de Educación Alternativa y Especial del Ministerio de Educación, desarrolla sus programas con materiales educativos que fueron producidos bajo los enfoques y lineamientos del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, articulando y contextualizando información humanística a actividades productivas y características de participantes y el contexto.

142. Entre las gestiones 2010-2017 se han alfabetizado 195.036 personas mayores de 15 años, reduciendo la tasa de analfabetismo a 2,51 % (Anexo 79).

143. El D.S. 004 de 11 de febrero de 2009, crea el Programa Nacional de Post Alfabetización-PNP “*Yo, Si Puedo Seguir*”, bajo responsabilidad de la mencionada Dirección General de Post Alfabetización, habiendo desarrollado procesos educativos de alfabetización y postalfabetización con personas mayores de 15 años en todo el territorio nacional, manteniendo la característica de maestras y maestros voluntarios.

144. En Post-alfabetización, las personas mayores de 15 años reciben información de educación primaria en dos etapas: la primera, abarca contenidos de primero a tercero y la segunda, de cuarto a sexto grado de primaria (Anexo 80).

145. Los procesos educativos de post –alfabetización cuentan con un currículo de Educación Primaria de Personas Jóvenes y Adultas enmarcado en el Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo, en los enfoques y lineamientos de la Ley 070, este currículo tiene carácter único y diversificado, flexible y modular integrado que se implementará progresivamente en los Centros de Educación Alternativa y puntos de Post-Alfabetización.

146. El D.S. 1318 de 8 de agosto de 2012 (“D.S. 1318”), modifica el objetivo del Programa Nacional de Post Alfabetización y establece nuevos beneficios para maestras y maestros, estudiantes, técnicos y profesionales que presten sus servicios como supervisores o facilitadores de alfabetización y/o post alfabetización en el programa. Finalmente la Resolución Ministerial 672/2012 de 5 de octubre de 2012, aprueba el Reglamento Operativo del D.S. 1318⁷².

147. Como se mencionó en el párrafo 87, se promulgó la Ley 070.

Derecho a la vivienda

148. En atención a las demandas de los pueblos indígenas, Bolivia ratificó mediante Ley 1257 de 11 de julio de 1991 (Anexo 81), el Convenio 169 de la Organización Internacional

⁷² R.M. 672 de 2012 “Reglamento Operativo del D.S. 1318 P.N.P disponible en: <http://www.minedu.gob.bo/files/publicaciones/veaye/dgpa/RM-672-2012-Reglamento-Operativo-D.S.-1318-PNP.pdf>.

del Trabajo-OIT, norma fundamental de protección de los derechos de los pueblos indígenas.

149. Asimismo, la Ley 247 de 5 de junio de 2012, de Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos destinados a Vivienda (“Ley 247”) (Anexo 82), en su Artículo 1, señala: *“La presente Ley tiene por objeto la regularización del derecho propietario de personas naturales que se encuentren en posesión continua, pública, pacífica y de buena fe, de un bien inmueble destinado a la vivienda, ubicada dentro la radio urbana o área urbana”*. Asimismo, el Artículo 3, establece: *“De conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado, toda persona tiene derecho: a una vivienda digna, la propiedad privada y al hábitat; y es obligación del Estado garantizar y universalizar el ejercicio pleno de los mismos”*.

150. El TSJ, como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, sustenta sus decisiones en relación al derecho a la propiedad y vivienda, en el marco del bloque de constitucionalidad integrado por los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos, ratificados por el país, conforme establece la CPE⁷³.

151. Los planes de desarrollo llevados adelante por el Estado Boliviano están orientados a garantizar íntegramente el “Derecho a la vivienda adecuada”, como lo establece la CPE, en su Artículo 19, *“I. Toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, que dignifiquen la vida familiar y comunitaria; II. El Estado, en todos sus niveles de gobierno, promoverá planes de vivienda de interés social, mediante sistemas adecuados de financiamiento, basándose en los primeros de solidaridad y equidad. Estos planes se destinarán preferentemente a familias de escasos recursos, a grupos menos favorecidos y al área rural”*.

152. La Ley 393, en su Artículo 59.I, dispone que las tasas de interés activas para los financiamientos destinados al sector productivo y vivienda de interés social, serán regulados mediante Decreto Supremo por el Órgano Ejecutivo del nivel central; en ese entendido, mediante D.S. 1842 de 18 de diciembre de 2013 (Anexo 83), se estableció el régimen de tasas de interés activas para el financiamiento destinado a vivienda de interés social, determinando niveles mínimos de cartera de créditos para préstamos destinados al sector productivo y de vivienda de interés social, que las entidades de intermediación financiera deben mantener.

153. En el marco del D.S. 1893 de 12 de febrero de 2014 (Anexo 84), se emitió el “Reglamento para Operaciones de Crédito a Personas con Discapacidad”, aprobado mediante Resolución ASFI/536/2016 de 27 de julio de 2016, que establece los lineamientos, condiciones y requisitos específicos que deben considerar las entidades de intermediación financiera, para evaluación y otorgación de créditos a personas con discapacidad, así como a cónyuges, padres, madres o tutores de personas con discapacidad, viabilizando de esta forma el acceso al crédito a este sector de la población en condiciones de igualdad de oportunidades.

154. Las medidas asumidas por parte del Estado tuvieron la finalidad de disminuir el déficit habitacional, tanto cualitativo como cuantitativo entre las gestiones 2006 a 2014. A través del Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS) y la Unidad Ejecutora de Viviendas de Emergencia (UEVE), se llegaron a construir 54.293 viviendas sociales en todo el país, habiendo atendido mayormente al área rural, beneficiando a la población de menores ingresos y más vulnerable que no contaba con vivienda propia.

⁷³ La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 1. Constitución Política del Estado, 2. Los tratados internacionales, 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena, 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes.

155. Sin embargo, a partir de 2011, se crea la Agencia Estatal de Vivienda (AEVIVIENDA)⁷⁴ como institución pública descentralizada con el objetivo de dar cambios sustanciales a los anteriores programas de vivienda social, con la premisa de separar los roles de ejecución, instruyendo al Viceministerio de Vivienda y Urbanismo la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Plurianual del Déficit Habitacional, dejando en AEVIVIENDA la responsabilidad de la ejecución de los programas y/o proyectos integrales de dotación de viviendas a nivel nacional en las modalidades de crédito, subsidio, mixta, de forma concurrente con los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales.

156. El Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional (2016-2020) (Anexo 85)⁷⁵, instrumento de asignación y planificación de vivienda social del Estado, establece las metas de reducción del déficit habitacional a partir de la asignación de unidades habitacionales por departamento y por municipio, considerando criterios de equidad, atención a la población en condiciones de pobreza y extrema pobreza, sectores de menores ingresos y principalmente a población vulnerable (pueblos indígenas, mujeres y jefas de hogar, población adulto mayor y personas con discapacidad), habiéndose concluido a la fecha 57.315 viviendas.

Recomendación 28

Respeto e igualdad de los derechos de los pueblos indígenas

Derecho a la educación

157. En el ámbito educativo, a efectos de garantizar el respeto de los derechos reconocidos por el Pacto a los Pueblos Indígenas, el Estado boliviano, desarrolló las siguientes normas:

a) Ley 070, que establece que la educación es obligatoria y procesual hasta el bachillerato para niños, niñas y jóvenes⁷⁶; asimismo, reconoce que la educación es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo⁷⁷;

b) Ley 269, tiene por objeto proteger, reconocer, difundir, desarrollar y regular los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los habitantes del Estado;

c) D.S. 1313 de 2 de agosto de 2012 (“D.S. 1313”) (Anexo 86), que reglamenta el funcionamiento del Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas (IPELC), creado mediante el Artículo 88 de la Ley 070, como entidad pública descentralizada, bajo tuición del Ministerio de Educación, encargada de procesos de investigación lingüística y cultural, en coordinación con las universidades, escuelas superiores de formación de maestros y otras instancias académicas del Sistema Educativo Plurinacional.

158. Además, se encarga de evaluar y coordinar las actividades de los Institutos de Lenguas y Culturas (ILCs) con la participación de las organizaciones matrices de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos y Consejos Educativos de los Pueblos Originarios (CEPOs) de acuerdo a su realidad sociolingüística y cultural; además, proponer la implementación de lineamientos para la normalización, investigación y desarrollo de las lenguas y culturas de las NPIOCS a través de los ILCs.

159. Entre otras medidas adoptadas, se cuenta con las siguientes: a) Creación de la Unidad de Política Intracultural, Intercultural y Plurilingüe, dependiente del Ministerio de Educación⁷⁸; b) Implementación del Currículo Base Plurinacional, que toma en cuenta ejes articuladores de armonía y equilibrio con la madre tierra, valores sociocomunitarios, educación para la producción, lenguas indígenas originarias como instrumentos de

⁷⁴ Creada mediante D.S. 986 de 21 de septiembre de 2011.

⁷⁵ Aprobado por Resolución Ministerial 543/2016 de 30 de diciembre de 2016 y modificado por la Resolución Ministerial 267/2018 de 7 de septiembre de 2018. (Anexo 85.1).

⁷⁶ Ley 070, Artículo 9.

⁷⁷ Ley 070, Artículo 78.II.

⁷⁸ Encargada de elaborar políticas y acciones a favor de las NPIOCS, comunidades interculturales y el pueblo Afroboliviano.

comunicación, desarrollo y producción de saberes y conocimientos en todo el Sistema Educativo y rescate de las tecnologías de las NPIOCs; c) Aprobación de 7 currículos regionalizados mediante Resoluciones Ministeriales⁷⁹, 5 en proceso de revisión⁸⁰ y otros 5 en proceso de elaboración⁸¹, que incorporan al sistema educativo plurinacional, saberes, conocimientos, cosmovisiones, valores e historial de las NPIOCs.

160. Se emitieron libretas escolares en 13 lenguas indígenas originarias oficiales⁸²; se sistematizó y publicó 26 alfabetos originarios⁸³, se instalaron centros de investigaciones y capacitaciones para maestros de los pueblos indígenas, para el rescate y difusión de sus saberes y conocimientos⁸⁴; se cuenta con planes y programas académicos de formación general y especializadas en el marco de los currículos regionalizados; se crearon Universidades Indígenas⁸⁵ con recursos del IDH⁸⁶ destinados a las NPIOCs, estas universidades; y en el marco del D.S. 23425 de 15 de marzo de 1993, las organizaciones indígenas originarias y afrobolivianas disponen de 350 becas anuales a estudiantes de escasos recursos económicos⁸⁷.

Vivienda adecuada

161. Respecto a la vivienda adecuada, a través de AEVIVIENDA, mediante el Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional (2016-2020), se tiene programado ejecutar 115.000 viviendas sociales en todo el territorio nacional, donde se priorizará la atención hasta un 10 % de viviendas construidas y/o mejoradas a favor de población vulnerable, priorizando pueblos indígenas.

Derecho a la alimentación

162. Respecto al derecho a la alimentación, el Estado aprobó la Ley 144, que tiene por objeto normar el proceso de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria para la soberanía alimentaria, estableciendo las bases institucionales, políticas y mecanismos técnicos, tecnológicos y financieros de la producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios y forestales; define como finalidad, lograr la soberanía alimentaria en condiciones de inocuidad y calidad para el vivir bien de los bolivianos, en el marco de la economía plural.

163. Asimismo, conforme el Artículo 21 de la Ley 144, durante 2014, se aprobó la Política de Alimentación y Nutrición (PAN)⁸⁸, como instrumento que organiza los programas de seguridad alimentaria, buscando que la población boliviana tenga un estado

⁷⁹ A la fecha, los currículos regionalizados concluidos por los pueblos indígenas y presentados al Ministerio de Educación cuentan con Resoluciones Ministeriales de aprobación, como se detalla a continuación: Currículo Regionalizado del Pueblo Indígena Chiquitano con R.M. 684/2012 del 11 de octubre de 2012; Currículo Regionalizado del Pueblo Indígena Guaraní con R.M. 685/2012 del 11 de octubre de 2012; Currículo Regionalizado del Pueblo Indígena Quechua con R.M. 686/2012 del 11 de octubre de 2012; Currículo Regionalizado del Pueblo Indígena Ayoreo con R.M. 687/2012 del 11 de octubre de 2012; Currículo Regionalizado del Pueblo Indígena Aymara con R.M. 688/2012 del 11 de octubre de 2012; Currículo Regionalizado del Pueblo Indígena Guarayo con R.M. 689/2012 del 11 de octubre de 2012; Currículo Regionalizado del Pueblo Indígena Mojeño con R.M. 690/2012 del 11 de octubre de 2012.

⁸⁰ Afroboliviano, Uru, Tacana, Weenhayek y Yuracaré.

⁸¹ Yuqui, Itonama, Maropa, Movima y Cavineño.

⁸² Aimara, Quechua, Guaraní, Uru, Yuracaré, Mojeño-Trinitario, Tacana, Besiro, Chimán y Guarayo.

⁸³ Aimara, Araona, Ayoreo, Baure, Bésiro, Cavineño, Chácobo, Ese Ejja, Guaraní, Guarayo, Itonama, Mojeño-Trinitario, Mojeño-Ignaciano, Mometén, More, Movima, Quechua, Siriono, Takana, Tsimane, Weenhayek, Yaminawa, Yuracaré, Uru y Leco.

⁸⁴ Tacana, Tsimane, Mometén y Movima.

⁸⁵ Universidad Apiaguaiki Tupa (Guaraní), Universidad Tupak Katari (Aymara), Universidad Casimiro Huanca (quechua).

⁸⁶ El IDH, nace como efecto de demandas sociales y de la revisión de la política sobre hidrocarburos, estableciendo el cobro de impuestos y/o regalías a las empresas petroleras.

⁸⁷ Que representan el 10 % de la población estudiantil de las universidades privadas.

⁸⁸ D.S. 2167 de 29 de octubre de 2014.

nutricional adecuado, asegurando el consumo de alimentos variados que cubran los requerimientos nutricionales en todo el ciclo de la vida⁸⁹.

164. Por otra parte, en el marco del Pilar 8 “*Soberanía Alimentaria, con la Construcción del Saber Alimentarse Bien*” de la Agenda Patriótica 2025, y de la Ley 777, se aprobaron durante 2016: el Programa Multisectorial de Desnutrición Cero 2016-2020 (PMDC 2016-2020)⁹⁰; en 2017, el Plan Multisectorial de Alimentación y Nutrición (PMUAN) 2016-2020⁹¹; y, el Plan Multisectorial de Alimentación y Nutrición el Curso de la Vida (PMAN-CV)⁹².

Servicios de Salud

165. Durante 2013, se promulgó la Ley 459 de 19 de diciembre, de Medicina Tradicional Ancestral Boliviana (“Ley 459”) (Anexo 87) y su D.S. reglamentario 2436 de 19 de diciembre (Anexo 88), que regulan el ejercicio, práctica y articulación de la Medicina Tradicional Ancestral Boliviana en el Sistema Nacional de Salud, la estructura, organización y funcionamiento de las instancias asociativas, consultivas, formativas y de investigación; asimismo, la Ley 459, establece los derechos y deberes de las y los usuarios de la Medicina Tradicional Ancestral Boliviana en todas sus formas, modalidades y procedimientos terapéuticos⁹³.

166. De conformidad con la Ley 459, se cuenta con un Programa Nacional de Salud Intercultural que busca impulsar la articulación de la Medicina Tradicional Adicional Ancestral Boliviana con la medicina académica, asimismo fomenta su soberanía tecnológica y su revalorización.

167. Por otro lado, en el marco de la Ley 459, se impulsó el reconocimiento de los prestadores de Medicina Tradicional Ancestral: médicos tradicionales, parteras/os, naturistas y guías espirituales, y a través de normativa desarrollada por los 9 departamentos del país, se impulsó su inserción como servidores reconocidos por el Sistema Público.

Recomendación 29

Igualdad entre hombres y mujeres

168. En virtud de la Ley 070, el Estado Boliviano tiene como objetivo fundamental formar mujeres y hombres con identidad y conciencia de la diversidad territorial, económica, social y cultural del país; asimismo, implementar políticas y programas de atención integral educativa a poblaciones vulnerables y en condiciones de desventaja social.

⁸⁹ La PAN se elaboró en base a nueve lineamientos: 1. Apoyo a la agricultura familiar comunitaria sustentable; 2. Agricultura familiar urbana y periurbana; 3. Uso y aprovechamiento de la biodiversidad para fines nutricionales; 4. Programa Multisectorial de Alimentación y Niño en el Ciclo de la Vida; 5. Programa Cosecha agua de lluvia; 6. Agua para comunidades Menores a 2.000 habitantes; 7. Programa de Educación Alimentaria Nutricional (PEAN); 8. Alimentación Complementaria Escolar (ACE); y, 9. Programa de Desarrollo Productivo con Empleo Digno para la Seguridad con Soberanía Alimentaria del Pueblo Boliviano.

⁹⁰ Aprobado mediante Resolución Ministerial 1309/2018.

⁹¹ Aprobado mediante Resolución Multiministerial 0001/2017 de 10 de abril de 2017. El PMUAN establece cinco metas: 1. Eliminar el hambre, la desnutrición y reducir la malnutrición; 2. Acceso Universal a la Alimentación Complementaria Escolar (ACE); 3. Soberanía a través de la producción local de alimentos; 4. En Bolivia se reconoce y fomenta la diversificación de la producción, protección de las variedades locales y el fomento a las culturas y tradiciones alimentarias; 5. Bolivia ha puesto en marcha programas intersectoriales, en el marco de la PAN.

⁹² Aprobado mediante Resolución Ministerial 069/2017.

⁹³ Ley 459, Artículo 1. “La presente Ley tiene por objeto: regular el ejercicio, la práctica y la articulación de la medicina tradicional ancestral boliviana en el Sistema Nacional de Salud; Regular la estructura, organización y funcionamiento de las instancias asociativas, consultivas formativas y de investigación; y los derechos y deberes de las usuarias y los usuarios de la medicina tradicional ancestral boliviana en todas sus formas, modalidades y procedimientos terapéuticos; promover y fortalecer el ejercicio y la práctica de la medicina tradicional ancestral boliviana.”

169. Se implementaron incentivos para fortalecer la permanencia y formación de las y los estudiantes, como ya se mencionó, el Bono Juancito Pinto en los niveles primario y secundario de las unidades educativas fiscales y de convenio; y el Bono Bachiller de Excelencia y un premio de Bs.1.000, a una estudiante mujer y a uno varón de cada una de las unidades educativas de toda Bolivia, es así que, durante 2016, 9.135 estudiantes recibieron el bono a la excelencia, es decir, en educación regular, 4.051 fueron estudiantes mujeres y 4.073 estudiantes varones, de los cuales, 14 estudiantes mujeres y 6 estudiantes varones, obtuvieron 100 puntos de promedio a nivel nacional; y en educación alternativa, 519 estudiantes mujeres y 492 estudiantes varones recibieron el mencionado bono.

170. En 2017, en el Subsistema de Educación Regular fueron matriculados 2.883.960 estudiantes en el nivel inicial, primaria y secundaria; de los cuales el 49 % corresponde a mujeres y el 51 % a varones, la diferencia del 2 % se explica por las condiciones de la composición de la población en el Estado boliviano (Anexo 89).

171. Respecto a la distribución equitativa de tierras, la CPE⁹⁴ establece que se realizará de acuerdo con las políticas de desarrollo rural sustentable y la titularidad de las mujeres al acceso, distribución y redistribución de la tierra, sin discriminación por estado civil o unión conyugal; asimismo, el Estado tiene la obligación de promover políticas dirigidas a eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres en el acceso, tenencia y herencia de la tierra.

172. De los resultados del proceso de saneamiento, se cuenta con un 53 % de varones con título de propiedad de tierra y un 46 % de mujeres, seguido de un 1 % títulos de propiedad de tierra otorgados a propiedades comunitarias, (Anexo 90) y en lo que respecta a los procesos de dotación ordinaria de distribución de tierras fiscales un 42 % de participación de las mujeres y 39.631 familias beneficiadas a nivel nacional con una superficie de 3.020.537 ha.

173. Bajo el principio de progresividad, con relación al derecho a la vivienda AEVIVIENDA, en el marco de sus atribuciones establecidas mediante D.S. 986 de 21 de septiembre de 2011 (Anexo 91), priorizó instrumentos que focalizan sus esfuerzos en poblaciones vulnerables, mediante la Política de acceso a la vivienda social para jefas de hogar⁹⁵.

Creación de nuevos empleos

174. Durante 2012 a 2017, el Estado boliviano, implementó el Programa de Apoyo al Empleo (PAE) que benefició a 19.580 personas a nivel nacional facilitando su inserción y experiencia laboral, de las cuales se cuenta con un registro de inserción laboral de 8.422 trabajadores en los puestos de trabajo⁹⁶.

175. Por otra parte, en el 2017, a objeto de incorporar políticas de empleo inmediato e incentivos a la inserción laboral, se aprobó el Plan de Generación de Empleo que contempla: a) Programa de Infraestructura Urbana⁹⁷; b) Protección y Habilitación de Áreas Productivas⁹⁸; c) Inserción laboral⁹⁹; d) Fondo para Capital Semilla¹⁰⁰; y, e) Proyectos productivos financiados por el Fondo de Desarrollo Indígena¹⁰¹.

⁹⁴ CPE, Artículo 395.

⁹⁵ Las mujeres solas, jefas de hogar, que tengan dos o más hijos a su cargo, que vivan en condiciones de vulnerabilidad y no sean propietarios de una vivienda serán beneficiadas con una vivienda adecuada y segura, con acceso a servicios sociales para la educación y cuidado de los hijos, recreación y equipamiento, lo cual permita un desarrollo personal de la madre y sus dependientes.

⁹⁶ Mediante una capacitación en un puesto de trabajo (in situ) en sectores de la economía nacional.

⁹⁷ El cual a través de proyectos de enlasetado y mejoramiento de infraestructura urbana generó 5.412 empleos en todo el país, asimismo, dentro de este programa se encuentra el fondo concursable "Mi barrio, mi hogar", que cuenta con 24 proyectos, con los que se generó 10.000 empleos.

⁹⁸ Este Programa al finalizar la etapa de Preinversión ejecutará obras de Protección, de habilitación de áreas productivas, pretendiendo generar 5.000 empleos.

⁹⁹ El Programa de Inversión laboral tiene por objeto generar empleos dignos y de calidad para jóvenes profesionales y no profesionales, con o sin experiencia que, a través de incentivos económicos se cubre un porcentaje de los costos laborales a las empresas privadas, permitiendo el ahorro del 45 % de

176. Con la implementación del Plan de Generación de Empleo, se crearon 58.296 nuevos empleos, beneficiando a 200.000 familias y generando 280 nuevos emprendimientos.

177. A través del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD), durante 2017, se creó la Unidad de Coordinación General del Plan Nacional de Empleo, con el objeto de implementar el Programa de Inserción Laboral, incentivar al sector privado a generar nuevos empleos dignos para las y los jóvenes; en ese entendido el programa comprende dos modalidades:

- Programa de Mejora de la Empleabilidad y los Ingresos Laborales de los Jóvenes, enfocado a la inserción de jóvenes urbanos entre 18 a 26 años de edad, de bajos ingresos y sin educación terciaria;
- Programa de Apoyo al Empleo II – Piloto de Jóvenes (PAE II), brinda incentivos a las unidades económicas para la inserción laboral de jóvenes, entre 18 y 35 años de edad, con formación académica técnico y/o profesional, con o sin experiencia laboral. Este programa es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que cubre un salario básico entre Bs. 2.500 a Bs. 4.000.

178. Asimismo, se cuenta con el Servicio Público de Empleo de Bolivia, servicio nacional gratuito, al que pueden acceder todas las personas mayores de 18 años que necesiten encontrar un empleo:

- Facilita la articulación entre los buscadores de empleo (oferta) y los servicios de empleo requeridos (demanda);
- Colabora a las empresas en la búsqueda de candidatos/as para cubrir sus vacancias (intermediación laboral);
- Difunde mediante una plataforma web, las vacancias laborales;
- Vincula la oferta y demanda laboral con proyectos de empleo.

179. Así también, el MTEPS dio inicio al “Programa de Apoyo al Empleo II”, cuyo objetivo es la inserción laboral de más de 25 mil personas mayores de 18 años, que independientemente de su formación educativa, podrán trabajar en empresas públicas y privadas de las capitales de departamentos del país.

180. Por otro lado, el Estado boliviano, promovió como medida legislativa la Ley 977 de 29 de septiembre de 2017, de Reinserción Laboral y de Ayuda Económica para personas con Discapacidad (“Ley 977”) (Anexo 92), que busca establecer la inserción laboral en los sectores público y privado, de personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menor de dieciocho años¹⁰²; asimismo, establece la responsabilidad de los GAM, para realizar el pago de un Bono mensual para las personas con discapacidad grave y muy grave, que tengan acreditado legalmente su domicilio en su respectiva jurisdicción. De igual forma en 2017, se aprobó el D.S. 3437 de 26 de septiembre (“D.S. 3437”) (Anexo 93), que reglamenta la Ley 977.

181. En cumplimiento del D.S. 3437, se construyó la Plataforma Plurinacional de Información de Personas con Discapacidad “Eustaquio Moto Méndez”, a cargo del

sus costos laborales, este programa cuenta con 40 millones de dólares; en ese entendido, el programa benefició a 4.224 jóvenes que se encuentran trabajando en distintas empresas del país y a 900 jóvenes capacitados en distintos talleres de empleabilidad.

¹⁰⁰ A través del Fondo Capital Semilla, se ofrece créditos para financiar emprendimientos, habiendo financiado 280, ejecutando más de 2 millones de dólares americanos de los 9,4 millones de dólares con los que cuenta el Fondo.

¹⁰¹ Prioriza la contratación intensiva de mano de obra local en áreas rurales del país, generando 40.806 nuevos empleos y beneficiando a 187.851 familias.

¹⁰² Ley 977, Artículo 1.

MTEPS, que genera reportes anuales y mensuales para efectuar el pago del bono mensual destinado a personas con discapacidad grave y muy grave¹⁰³.

Recomendación 31

Seguridad Social

182. El Artículo 18 de la CPE, establece que el sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social. El sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno.

183. Los Artículos 35 al 45 de la norma constitucional, regulan el derecho a la Salud y a la seguridad social. En ese entendido, el Estado, en todos sus niveles, debe proteger el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, bienestar colectivo y acceso gratuito de la población a servicios de salud.

184. La Ley 475, en su Artículo 5, determina que son beneficiarias y beneficiarios de la atención integral y protección financiera de salud, todos los habitantes del territorio nacional que no cuenten con algún seguro de salud y que estén comprendidos en los siguientes grupos poblacionales:

- Mujeres embarazadas, desde el inicio de la gestación hasta los seis (6) meses posteriores al parto;
- Niñas y niños menores de cinco (5) años de edad;
- Mujeres y hombres a partir de los sesenta (60) años;
- Mujeres en edad fértil respecto a atenciones de salud sexual y reproductiva;
- Personas con discapacidad que se encuentren calificadas según el Sistema Financiero Informático del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad – SIPRUNPCD.

185. El Artículo 6 de la Ley 475, establece sobre las Prestaciones de Salud: la atención integral en salud comprende las siguientes prestaciones: acciones de promoción, prevención, consulta ambulatoria integral, hospitalización, servicios complementarios de diagnóstico y tratamiento médico, odontológico y quirúrgico, y la provisión de medicamentos esenciales, insumos médicos y productos naturales tradicionales.

186. Conforme la información elaborada por el INE, al 2015 existen cerca de 154.000 trabajadores independientes, los cuales acceden a la seguridad social de manera voluntaria.

187. En Bolivia los trabajadores independientes pueden afiliarse al Seguro Social Obligatorio (SSO) y registrarse en una Administradora de Fondos de Pensiones, de manera libre y voluntaria, a través del pago de la primera cotización. Los trabajadores independientes acceden a los beneficios del sistema previsional en igualdad de condiciones respecto de los trabajadores dependientes. La pensión de jubilación depende del monto de la Cuenta Individual del afiliado. La prestación de jubilación se paga, independientemente de la edad, cuando el afiliado tenga en su Cuenta Individual un monto que permita el financiamiento de una pensión igual o superior al 70 % de su salario base y de la prestación por muerte para sus beneficiarios. A partir de los 65 años de edad, el afiliado independientemente del monto acumulado en su cuenta individual, tiene derecho a solicitar voluntariamente la prestación de jubilación en su favor y sus beneficiarios.

188. Los ingresos por los cuales se pagan las cotizaciones se determinan sobre la base de la renta imponible mensual que el trabajador independiente declare a la Administradora a la cual se afilie. Para los afiliados independientes los ingresos mensuales declarados no pueden ser inferiores al salario mínimo nacional, ni superiores al equivalente a sesenta veces al salario mínimo nacional vigente. Las cotizaciones son pagadas por el trabajador

¹⁰³ Tienen acceso a la información de la plataforma Eustaquio Moto Méndez, el MTEPS, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y los Gobiernos Autónomos Municipales.

independiente en la Administradora de Fondos de Pensiones a la que se encuentre afiliado o en las instituciones que tengan convenio con ella.

189. Los independientes pueden cotizar el monto equivalente al 10 % de su Ingreso Cotizable. Asimismo, los afiliados pueden incrementar libremente el monto de sus aportes, mediante cotizaciones adicionales.

190. La Ley 065 de 10 de diciembre de 2010 (Anexo 94), de Pensiones, en su Artículo 5, reconoce 3 sistemas de fondos pensiones: Régimen contributivo, que comprende el fondo de ahorro previsional, fondo de vejez y fondo colectivo de riesgos; régimen semicontributivo y régimen no contributivo

Recomendación 32

Alimentación y nutrición

191. Entre las principales leyes relacionadas con la alimentación y la nutrición, desde 2014, se cuenta con las siguientes: Ley 622, destaca aspectos relacionados con las compras locales de alimentos y las responsabilidades de los niveles nacional, departamental y municipal y la Ley 775, establece mecanismos y lineamientos para promover hábitos alimentarios saludables, a fin de prevenir enfermedades crónicas relacionadas con la dieta, con la finalidad de contribuir al ejercicio del derecho a la salud y a la alimentación.

192. Entre otras medidas adoptadas, el Estado a través del Comité Técnico del Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición (CT-CONAN), cuenta con el Programa Multisectorial Desnutrición Cero 2016-2020, con tres componentes: Alimentación Complementaria Escolar, Educación Alimentaria Nutricional y Huertos Escolares Pedagógicos.

193. A través de la alimentación complementaria escolar, se realizó el seguimiento a nivel nacional sobre las dificultades relacionadas a la alimentación y nutrición escolar, asimismo, se elaboró el documento técnico de apoyo a los Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) “Lineamientos Técnicos Administrativos y Estándares de Calidad para dotación de la Alimentación Complementaria Escolar”; además de diagnósticos sobre la dotación de la alimentación complementaria escolar en 2013 y 2015¹⁰⁴.

194. En el marco de la Educación Alimentaria Nutricional, se incorporaron contenidos de alimentación y nutrición en el Currículo Base del Sistema Educativo Plurinacional; elaborándose material educativo y didáctico para maestras y maestros; y se capacitó a 14.800 maestras y maestros sobre la temática, promoviendo su implementación en aula.

195. En relación con los huertos escolares pedagógicos, el Ministerio de Educación, construyó 10 huertos escolares pedagógicos en áreas urbana y rural a nivel nacional, enfatizando la sostenibilidad de los mismos.

196. Respecto a las medidas adoptadas sobre producción alimentaria, desde 2011, se promulgaron dos leyes principales: Ley 144 y la Ley 338.

197. La Ley 144, establece 16 políticas y crea varias instituciones estatales, el seguro agrícola, las empresas de semillas e insumos agrícolas, servicios de asistencia técnica, créditos, entre otras. Cabe señalar, que la referida Ley destaca la creación del seguro agrícola universal “Pachamama” y del Consejo Plurinacional Económico Productivo (COPEP), como instancia encargada de coordinar su implementación.

198. En esa línea, entre los productos de la función social de los servicios financieros de reciente creación, es el Fondo Capital Semilla (FOCASE)¹⁰⁵, que responde a una nueva medida adoptada por el Estado boliviano, para atender la necesidad de financiamiento de personas naturales, especialmente de aquellas que están iniciando su carrera profesional o técnica como de las micro y pequeñas empresas de reciente puesta en marcha que requieren

¹⁰⁴ <http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/bol152754.pdf>.

¹⁰⁵ Constituido mediante Resolución Ministerial 055 de 10 de febrero de 2017, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

financiamiento para impulsar sus emprendimientos productivos o de servicios, apoyando la transformación de la matriz económica del país.

199. Por su parte, la Ley 338, define y caracteriza la agricultura familiar sustentable, para que sea reconocida por el Estado como parte de la economía plural y como proveedora de alimentos de los programas nacionales como la Alimentación Complementaria Escolar y el Subsidio de Lactancia Materna.

200. Por otro lado, la Ley 144, establece respecto a la política de protección de los recursos genéticos naturales, que el Estado boliviano debe, proteger la biodiversidad, como sustento de los sistemas de vida y sus procesos naturales, garantizando la seguridad con soberanía alimentaria y la salud de las personas, en ese entendido, dispone que no se introducirá en el país paquetes tecnológicos agrícolas que involucren semillas genéticamente modificadas de especies de las que Bolivia es centro de origen o diversidad, ni aquellos que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana¹⁰⁶.

Recomendación 33

Lucha contra la violencia

201. A efectos de prevenir y combatir todas las formas de violencia de género, asegurando la aplicación efectiva del marco legislativo, se avanzó en la despatriarcalización del Estado boliviano, la gestión pública y la redistribución de los recursos. La Ley 348 de 9 de marzo de 2013, Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (“Ley 348”) (Anexo 95) establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores.

202. En ese entendido, desde 2012, se cuenta con indicadores sobre Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a efectos de contar con datos estadísticos que permiten formular, dar seguimiento y evaluar programas y políticas públicas encaminadas a la promoción y protección de ese derecho.

203. En cumplimiento de la Ley 348 y la Ley 243 de 28 de mayo de 2012, Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres (Anexo 96), desde 2015, hasta la actualidad, se han constituido 6 Consejos Sectoriales e Intersectoriales “Por una Vida Libre de Violencia”, encargados de establecer la coordinación entre los Órganos y niveles del Estado, articulados en una instancia consultiva, de proposición, concertación y aprobación.

204. En 2014, se implementó el Sistema Integrado Plurinacional de Prevención, Protección, Atención, Sanción y Eliminación de la Violencia en Razón de Género (SIPPASE-VRG), a cargo de la Unidad del SIPPASE dependiente del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, que reorganiza todo el sistema de atención integral a las mujeres en situación de violencia y la información de los servicios públicos y privados; asimismo, emite certificaciones sobre antecedentes de los agresores, denuncias, actuación de servidoras y servidores públicos, y toda información que pueda servir para la prevención, atención, protección y sanción de casos individuales.

205. El SIPPASE-VRG, cuenta con los siguientes instrumentos especializados destinados a fortalecer las instancias actoras directas en la prevención, atención, protección, persecución, sanción y reparación del daño a mujeres en situación de violencia:

- a) Construcción del Modelo para la Unidad de Atención Integral e Inmediata (UAI);
- b) Modelo Boliviano Integrado de Actuación frente a la Violencia en Razón de Género (Anexo 97);
- c) Guía para la Declaratoria de Alerta contra la Violencia en Razón de Género (Anexo 98);

¹⁰⁶ Ley 144, Artículo 5.2.

- d) Guía para la Gestión de las Casas de Acogida y Refugios Temporales (Anexo 99);
- e) Guía para el Funcionamiento de los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) (Anexo 100);
- f) Guía de Actuación para Autoridades Indígenas (Anexo 101);
- g) Sistema de Información del Registro Único de Violencia (RUV)¹⁰⁷.

206. El RUV como parte del Sistema de Información del SIPPASE, que permite registrar los casos de violencia, las características de las personas agredidas y agresoras. Las estadísticas que se obtienen de este registro permiten la formulación de políticas públicas en la temática.

207. Por otro lado, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) implementa las siguientes herramientas para cualificar su labor en la atención a mujeres víctimas de violencia: Formulario de Valoración de Riesgo, Hoja de Recomendaciones para la Atención e Información que debe brindarse a las Mujeres en Situación de Violencia, Planes de Seguridad, Buzones de Sugerencia y el Sistema Informático Georreferenciado de Atención de Denuncias y Seguimiento de Casos de la FELCV.

208. Por su parte, la Fiscalía aplica, asistencia y protección especializada a las víctimas de violencia en razón de género¹⁰⁸ con numerosos instrumentos a efectos de garantizar una investigación pronta y objetiva. Entre las gestiones 2013-2018, el Órgano Judicial a través de la Escuela de Jueces del Estado, ha considerado al componente de género, como un elemento central y transversal de la programación académica, en diferentes módulos y unidades de aprendizaje correspondientes al Plan Curricular del Primer Curso de Formación y Especialización Judicial en el Área Ordinaria (desarrollado de 2015 a 2017 y del cual egresaron 171 personas que han sido designadas en cargos jurisdiccionales por el Consejo de la Magistratura), así como en el Segundo Curso de Formación y Especialización Judicial en el Área Ordinaria (el cual cuenta con 150 estudiantes, habiendo iniciado actividades en diciembre de 2017 y previéndose concluya hasta octubre de 2019).

209. Además, se elaboró e implementó el Plan Multisectorial para el Avance en la Despatriarcalización de las Mujeres a Vivir Bien 2016-2020 (Anexo 102); creándose una Comisión Interinstitucional conformada por siete Ministerios¹⁰⁹ que aprobó la “Política

¹⁰⁷ Registro Único de Violencia publicado en el dominio: <http://sippase.justicia.gob.bo/sippase-ruv/App/Modules/Main/index.php>.

¹⁰⁸ Protocolo para el Abordaje Informativo de la Violencia contra las Mujeres basada en Género, Protocolo para la Prevención y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Calle, Protocolo de Actuación para la Investigación del Femicidio, Protocolo de Entrevista en cámara Gessell y Metodología de recolección del testimonio a niños, niñas y adolescentes, víctimas y/o testigos – 2012, Protocolo de Valoración Médica Forense en Delitos Sexuales-2013, Protocolo de Atención especializada Médico Forense de Violencia contra las Mujeres-2013, Protocolo de Atención en Psicología Forense Especializada para mujeres víctimas de violencia-2013, Protocolo para la Homologación de Certificados Médicos – 2013, Protocolo para la adopción de medidas de protección y asistencia en el Ministerio Público, Protocolo de actuaciones para la persecución penal en casos de la Ley 348 – 2013, Protocolo y Ruta Crítica Interinstitucional para la atención y Protección a Víctimas, en el marco de la Ley N° 348 – 2014, Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género, Guía de Atención a Víctimas de Violencia Sexual para garantizar la implementación de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014, Guía de Recomendaciones para la Investigación Eficaz de Femicidio, Guía para la Calificación de hechos de Violencia en el marco de la Ley 348, Guía de uso de Cámara Gesell – 2013, Guía de actuación de la UPAVT – 2016, Guía de actuación de la UPAVT – 2014 (2da edición), Guía de uso de la Cámara Gesell – 2017 (2da edición), Manual de Legislación sobre la Violencia contra la Mujer, Manual de directrices mínimas para la investigación de hechos delictivos que atenten contra la vida de mujeres en razón de género-Femicidio-2016, Reglamento interno para la utilización de fondos destinados a medidas de protección – 2016, Preguntas frecuentes sobre la Ley 348, Glosario de Términos para la implementación de la Ley N° 348, Cartillas de Procedimientos Policiales para luchar contra la Violencia hacia las Mujeres de la FELCV.

¹⁰⁹ Justicia y Transparencia Institucional, Educación, Salud, Comunicación, Gobierno, Culturas y Turismo y Trabajo, Empleo y Previsión Social.

Pública Integral para una Vida Digna de las Mujeres” que busca generar condiciones y oportunidades para que las mujeres ejerzan el derecho a una vida libre de violencia, con base en la construcción de una cultura de paz, vigencia de sus derechos y Planes Departamentales de lucha contra la violencia en razón de género.

210. Respecto a su obligación de protección, el Estado Plurinacional de Bolivia, al priorizar la defensa y protección de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, definió la asignación de recursos presupuestarios destinados a esa población, para la “Defensa y Protección de la Mujer”¹¹⁰, con la finalidad de garantizar la promoción de planes, programas, proyectos y políticas sociales a nivel nacional, departamental y municipal para las mujeres en situación de vulnerabilidad.

211. Bajo ese marco, los Gobiernos Autónomos Departamentales (GAD) utilizan el 30 % de los recursos provenientes del IDH de Seguridad Ciudadana para la construcción y equipamiento de las casas de acogida y refugios temporales para mujeres en situaciones de violencia y sus dependientes y destinan el 10 % para la provisión de personal y gastos de funcionamiento. De la misma forma, los GAMs utilizan entre el 25 % y 30 % de esos recursos para el funcionamiento de los SLIM, infraestructura, equipamiento, y la promoción y desarrollo de programas para el desarrollo económico – productivo y empleo destinados a mujeres.

212. Como ejemplo, en el departamento de La Paz los Centros de Acogida, brindan servicios de alimentación nutritiva y balanceada, vestuario, protección y atención disciplinaria en salud, trabajo social y psicología, además de capacitación técnica. Del mismo modo, en el departamento de Potosí está en funcionamiento la “*Casa de Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia*”, con capacidad de albergar a 30 mujeres víctimas de violencia con sus hijos, donde se les brindará tratamiento psicológico, capacitación en oficios técnicos y alimentación, por un periodo de seis meses.

Recomendación 34

Acceso al sistema de salud

213. De conformidad con la CPE, el D.S. 29601 de 11 de junio de 2008 (Anexo 103) y la Ley 031¹¹¹, el Estado boliviano, cuenta con la Política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI), que tiene por objeto, eliminar la exclusión social, garantizando el acceso universal y gratuito a toda la población boliviana a través de un sistema único de salud; asimismo, es implementada en todos los niveles de atención, con prioridad en el primer nivel a efectos de enfatizar la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la atención integral e intercultural.

214. Es así que desde 2013, el Ministerio de Salud, a través del Programa SAFCI, implementó el Programa MI SALUD, en 310 municipios¹¹² con más de 2.800 médicos desplazados en todo el territorio nacional, en 2.237 establecimientos de salud de primer nivel de atención, con más de 16.000.000 atenciones médicas realizadas, de las cuales, el 50 % corresponde a atenciones en visitas familiares (Anexo 104).

215. Respecto a los indicadores maternos infantiles, conforme el dato consolidado nacional, en el periodo comprendido entre 2013 a 2018, se atendieron 21.695 partos, se capturaron 149.702 embarazos nuevos y se tomaron 201.832 muestras para el Papanicolaou; se realizaron 2.334.988 evaluaciones integrales en niños menores de 5 años, de los cuales, 735.483 eran niños menores de 1 año (Anexo 105).

216. El Programa Mi Salud, cuenta con un proceso de carpetización familiar y educación para la vida, por el cual, durante 2013 a 2018, se realizaron 2.373.513 visitas familiares de

¹¹⁰ Programa presupuestario 25.

¹¹¹ Ley 031, Artículo 81.I.

¹¹² La Paz con presencia en 78 Municipios, Santa Cruz con 51 Municipios, Cochabamba con 47 Municipios, Chuquisaca con 29 municipios, Potosí con 37 municipios, Oruro con 24 Municipios, Tarija 11 Municipios, Beni con 18 Municipios y Pando con 15 Municipios.

seguimiento¹¹³, y 5.533.282 charlas educativas individualizadas y 1.513.686 charlas educativas dirigidas a grupos focales, centros de trabajo y unidades educativas (Anexo 106).

Recomendación 35

Seguro Universal Materno Infantil (SUMI)

217. Desde 2012, el SUMI amplió su cobertura con 231 nuevas prestaciones¹¹⁴, beneficiando a niños menores de cinco años y mujeres embarazadas que no cuentan con ningún seguro de salud, y que son atendidas de manera gratuita hasta los seis meses después del parto, habiéndose incrementado la cobertura a 79 prestaciones cubiertas por el sistema público de salud, sin costo para los pacientes.

218. Como resultado del alcance del SUMI, entre 2006 y 2011, la tasa de mortalidad infantil redujo de 52 a 40 por cada 1.000 nacidos vivos; asimismo, en el mismo periodo, la tasa de mortalidad de niños menores de cinco años se redujo de 65 a 51 por cada 1.000 nacidos vivos, y el índice de mortalidad materna bajó de 290 a 180 para cada 100.000 nacidos vivos.

219. Por otra parte, con el fin de ampliar los grupos poblacionales beneficiarios en prestaciones de servicios, en 2013, se promulgó la Ley 475, que tiene por objeto, establecer y regular la atención integral y la protección financiera en salud de la población beneficiaria que no se encuentre cubierta por el Seguro Social Obligatorio a Corto Plazo.

220. La Ley 475, define como beneficiarios de la atención integral y protección financiera de salud a los habitantes y estantes del territorio nacional que no cuenten con algún seguro de salud y que estén comprendidos en los siguientes grupos¹¹⁵:

- Mujeres embarazadas, desde el inicio de la gestación hasta los seis meses posteriores al parto;
- Niñas y niños menores de cinco (5) años de edad;
- Mujeres y hombres a partir de los sesenta (60) años;
- Mujeres en edad fértil respecto a atenciones de salud sexual y reproductiva;
- Personas con discapacidad que se encuentren calificadas según el Sistema Informático del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad –SIPRUNPCD.

221. Es así que, hasta 2016, se otorgaron 37.916.967 prestaciones en los establecimientos de salud a nivel nacional.

Recomendación 36

Reconducción comunitaria

222. La Ley 3545 de 28 de noviembre de 2006, de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria (Anexo 107) y su Reglamento D.S. 29215 de 2 de agosto de 2007 (Anexo 108), modificado por el D.S. 3467 de 24 de enero de 2018 (Anexo 109), tienen por objeto dar seguridad jurídica y protección a los pueblos indígenas, otorgándoles el derecho propietario de la tierra, mediante el título ejecutorial, siendo uno de los principales aspectos, el alcance del derecho a la libre determinación y los niveles de autonomía,

¹¹³ En el que se evaluó a cada uno de sus integrantes categorizándolos en los diferentes grupos de riesgo y se logró recoger todos los datos de las carpetas familiares.

¹¹⁴ Entre ellas: fisioterapias, exámenes de laboratorio, tratamiento de labio leporino, hemodiálisis, cirugías reconstructivas, exámenes para detectar enfermedades congénitas, como la fibrosis quística, que afecta a los pulmones y el sistema digestivo de los niños. Los costos de estas nuevas atenciones médicas son cubiertos con los fondos municipales que no fueron ejecutados durante el año o gestión.

¹¹⁵ Ley 475, Artículo 5.

respetando la igualdad de género, para que se desenvuelvan de acuerdo a su vida tradicional (usos y costumbres).

Recomendación 37

Propiedad intelectual

223. Respecto a la propiedad intelectual, la CPE establece en el Artículo 100.II que el Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual, individual y colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores, inventores y científicos.

224. En ese entendido, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), en 2017, realizó la consultoría: “Diagnósticos jurídico administrativos de los conocimientos tradicionales y saberes ancestrales – CTSA”, en la cual se abordó el análisis de la normativa nacional e internacional para la creación de registro de los CTSA; asimismo, durante el 2018, se está trabajando en un Proyecto de Ley de conocimientos tradicionales y saberes ancestrales, en el que se contempla su protección.
